



FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

“La Vulneración De Los Derechos Fundamentales En La Aplicación De La Prisión
Preventiva A Consecuencia De La Presión Mediática”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
ABOGADO

Autores:

Ricardo Antonio Rebatta Freundt (ORCID: 0000-0001-9410-6938)

Gerardo Martin Rivera Salazar (ORCID: 0000-0002-0944-8990)

Asesor:

Dra. Clara Isabel Namuche Cruzado (ORCID: 0000-0003-3169-9048)

Línea de Investigación:

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causa y Formas del Fenómeno Criminal

Callao - Perú

2019

Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a mi esposa Wendy y a mi hijo Sonny por el apoyo incondicional que me brindan de manera diaria, y también por incentivarme a lograr las metas que me he propuesto, sin ellos no lo hubiera logrado.

Ricardo Antonio Rebatta Freundt

Este trabajo se lo dedico a mis padres y a mi tía, quienes han sido parte fundamental en el desarrollo de mi carrera universitaria y me han apoyado incondicionalmente en la toma de mis decisiones.

Gerardo Martin Rivera Salazar

Agradecimiento

Agradezco a mi padre Napoleón William que desde el cielo velo siempre por hacerme una persona de bien, al igual que a mi madrecita Meche que me supo guiar por el buen camino al formarme con valores, eternamente agradecido a ustedes.

Ricardo Antonio Rebatta Freundt

Agradecimiento

Agradecemos a mis padres Gerardo y Margarita por su ardua enseñanza en todo este tiempo, a mi tía Carmen y mi tío Oscar por su crianza primando los valores y principios que me ayudan hacer mejor persona y así mejor profesional.

Gerardo Martin Rivera Salazar

PÁGINA DEL JURADO

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Nosotros, Ricardo Antonio Rebatta Freundt, identificado con DNI N° 25714213, y Gerardo Martin Rivera Salazar, identificado con DNI N° 73637009, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo – Filial Callao, Facultad de Derecho, Escuela Profesional de Derecho, declaramos bajo juramento que toda la documentación contenida en esta investigación es de carácter autentica.

En tal sentido, asumimos la responsabilidad ante cualquier incumplimiento dispuestos por nuestra casa de estudios.

Callao, 03 diciembre de 2019



Firma

Rebatta Freundt, Ricardo Antonio

DNI: 25714213



Firma

Rivera Salazar, Gerardo Martin

DNI: 73637009

Índice

	Pág.
Carátula	i
Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Página del jurado.....	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Índice.....	vi
RESUMEN	vii
ABSTRACT	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MÉTODO	13
2.1 Tipo y Diseño de investigación	14
2.2 Escenario de estudio.....	14
2.3 Participantes.....	14
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos.....	15
2.5 Procedimiento	15
2.6 Métodos de análisis de información	16
2.7 Aspectos éticos	17
III. RESULTADOS.....	18
IV. DISCUSIÓN	33
V. CONCLUSIONES	39
VI. RECOMENDACIONES	41
REFERENCIAS.....	43
ANEXOS.....	47

RESUMEN

El presente desarrollo de proyecto de investigación tiene como título “La vulneración de los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática”, cuyo objetivo general es “De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática”.

Para el trabajo en concordancia con la metodología de la investigación científica, se aplicó un enfoque cualitativo, de nivel básico, con tipo de investigación explicativa-descriptiva. Asimismo, el diseño aplicado en el presente desarrollo del proyecto de investigación es teoría fundamentada; además se tuvo cinco entrevistados, abogados todos ellos, especialistas en derecho penal y procesal penal.

En tanto, a los instrumentos de recolección de información, se aplicó las guías de entrevistas y la ficha de análisis de fuente documental, asimismo, los resultados de la investigación nos llevaron a determinar que si se vulneran los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática., ya que los jueces en su mayoría ceden al juicio paralelo de la presión mediática, alejándose de lo preceptuado en el artículo 268 del código procesal penal.

Finalmente, se llegó a la conclusión que, en la aplicación de la prisión preventiva, incide mucho la presión mediática que el caso genera, así como los magistrados dictan esta medida coercitiva de la libertad en forma arbitraria ya que en muchos casos no se cumplen los presupuestos materiales copulativa y ello, genera una vulneración de derechos fundamentales.

Palabras claves: presión mediática, prisión preventiva, derechos fundamentales, exceso de carcelería.

ABSTRACT

The present development of the research project is entitled “The violation of fundamental rights in the application of pretrial detention as a result of media pressure”, whose general objective is “In what way is fundamental rights violated in the application of preventive detention as a result of media pressure”.

For the work in accordance with the methodology of scientific research, a qualitative, basic level approach was applied, with an explanatory-descriptive type of investigation. Also, the design applied in the present development of the research project is grounded theory; In addition, there were five interviewees, lawyers all of them, specialists in criminal law and criminal procedure.

Meanwhile, to the information collection instruments, the interview guides and the documentary source analysis sheet were applied, likewise, the results of the investigation led us to determine that if the fundamental rights in the application of the prison are violated preventive as a result of media pressure., since the judges mostly yield to the parallel trial of media pressure: moving away from the provisions of article 268 of the criminal procedure code.

Finally, it was concluded that in the application of pretrial detention, the media pressure generated by the case is greatly affected, just as the magistrates dictate this coercive measure of freedom in an arbitrary way since in many cases the budgets are not met copulative materials and this, generates a violation of fundamental rights.

Keywords: media pressure, preventive detention, fundamental rights, excess of prison.

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro país, en el mes de Julio de 2004, mediante D.L. N° 957 fue creado el Código Procesal Penal, por lo cual, primigeniamente fue en el distrito judicial de Huaura en el año 2006 como plan piloto, asimismo, dicho modelo penal se viene implementando paulatinamente por todo el territorio nacional. Sin embargo, el C.P.P. ha comprometido nuevos cambios en la justicia penal peruana, en donde la eficiencia en los procesos penales y también el respeto por los derechos constitucionales emanada por la Carta Magna de 1993, son piezas fundamentales para el ejercicio procesal; y aplicando un sistema basado en la oralidad como principio rector.

Por lo tanto, la institución procesal en estudio es una medida coercitiva individual, donde en la actualidad se presenta una gran dicotomía entre dos instituciones jurídicas importantes y son: el principio de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario que es emanado por nuestra Carta Magna de 1993 y por otro lado se encuentra la responsabilidad del Estado cuyo fin es perseguir, sancionar o castigar la comisión de hechos delictivos cuando se vulneran bienes jurídicos protegidos por el código sustantivo.

Asimismo, el riesgo de cometerse abusos es enorme, en caso de una persona imputada y cuyo caso es mediático, puede ser sometida a prisión preventiva por un largo periodo 9, 18 y de 36 meses, prorrogables por 12 meses más en casos de criminalidad organizada lo que hace un total de 48 meses, al término de los cuales resulta no tener ninguna responsabilidad, puede verse sus derechos constitucionales gravemente vulnerados y su ámbito social, laboral sufrirán un severo daño irreparable.

En estos tiempos hemos visto a diario un uso y abuso desmedido de la aplicación de esta medida coercitiva personal, donde se presenta una incesante presión mediática en los operadores de justicia, para mayor abundancia de ejemplos, tenemos los casos de corrupción por el caso LAVA JATO, donde a la mayoría de implicados inicialmente con detención preliminar sin mediar acusación fiscal y bajo el supuesto de operar una organización criminal, les han impuesto 36 meses de prisión preventiva, esto con la anuencia de la prensa, del ciudadano de a pie y de fiscales y jueces que ceden a la presión con el prurito que se está luchando eficazmente contra la corrupción. En la misma línea de ideas, los mismos magistrados al declarar procedente dicho requerimiento y al no cumplir los presupuestos materiales, prescrita en el articulado 268° del Código Adjetivo, ello, conllevando a una gran

vulneración de derechos fundamentales del imputado o imputados. Esta investigación ha sido desarrollada buscando crear conciencia entre la prensa, los ciudadanos y en los operadores de justicia, de que una prisión preventiva es indicio de una pena anticipada, teniendo en cuenta el tiempo que una persona pasa en la cárcel, jamás será recuperado.

Para el desarrollo del proyecto fue relevante contar con diversas investigaciones, relaciona con el tema en estudio, pero los objetivos son distintos, al respecto tenemos los siguientes trabajos:

Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos y supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de sus conclusiones señalo que conforme a la normatividad constitucional y de otro orden vigente en lo cotidiano existe miedo de dictar dicho mandato, ya que algunos Ad-quo manejan el criterio de asegurar la presencia del imputado dentro de la investigación, empero debe ser de aspecto excepcional, como última ratio. Y la consecuencia, que ha generado ello, es que lo aplican de forma inmediata, a pesar que existen otras medidas menos gravosas que establece el Código Adjetivo.

Lo anteriormente señalado, nos hace ver que los estudios que se han realizado al respecto en torno al tema, hacen ver que esta medida cautelar debería ser la última ratio, toda vez, que su aplicación solamente se debería dar en casos muy excepcionales. Es de apreciarse que el estudio sobre la medida más gravosa tiene repercusiones internacionales, tanto es así, que nos lleva a pensar que el problema no es solamente a nivel nacional.

Por otro lado, López (2018), en su investigación profiere que, al dicta esta medida por la presión mediática, se viene efectuando de forma inadecuada, porque se está alejando del espíritu de su concepción, el cual es de ultima ratio, sin embargo, los magistrados vienen aplicando en demasía dicha medida procesal restrictiva, en sintonía con la presión ejercida por los medios de comunicación.

Por lo antes expuesto, cuando la fiscalía presenta su requerimiento ante el órgano jurisdiccional para su trámite correspondiente, en cada caso concreto debe cumplir con los 3 presupuestos materiales para que el Juez de garantías pueda resolver su procedencia. Sin embargo, en la actualidad se vienen dando diferentes casos emblemáticos donde la prensa ejerce control mediático y en consecuencia de ello, se dan decisiones que vulneran derechos

fundamentales, sabiendo que la doctrina Penal nacional señala que la medida provisional se utiliza como última ratio.

Asimismo, Cadenillas (2018), en la tesis titulada “La presión mediática de los medios de comunicación social en la aplicación de la prisión preventiva en el Perú, 2017”, concuerda con la tesis anteriormente citada en torno a que la presión mediática repercute de manera frontal en los operadores de justicia, cuando dictan la medida materia del estudio.

Álvarez (2018), en su trabajo de tesis titulada “Mandato indebido de prisión preventiva en la responsabilidad civil del Estado peruano en los juzgados penales de Lima-2017”, concluyó la institución procesal en estudio en su aplicación indebida; trae como consecuencia la responsabilidad civil por parte del Estado.

Por tanto, en el ámbito internacional Velarde y Alvarado (2018), en su tesis “La incorrecta aplicación de la prisión preventiva, en su afectación a la Presunción de Inocencia”, el problema encontrado es el juzgado encargado de resolver dicho requerimiento, conlleva que dicha acción debe ser de manera eficaz y eficiente. Empero, cuando no es así, dicha decisión que emite el Ad-quo, al no cumplir con los estándares mínimos legales, estarían ante una vulneración de derechos constitucionales.

Siguiendo con los antecedentes internacionales, Carpio y Cantos (2018), en su tesis titulada “El abuso a la Prisión Preventiva en los Juzgados Penales del Guayas - Guayaquil”, donde concluyeron magistrado desconocen la legislación, ya que, en la legislación supranacional firmado por Ecuador, no cumple lo dispuesto, toda vez que, la restricción de derecho a la libertad de un sujeto de derecho dentro de una sociedad, debe ser en casos excepcionales. Aunado a ello, la CIDH ha emitido diferentes informes respecto a esta institución procesal que coacta el derecho al libre tránsito de un sujeto, siendo uno de sus razonamientos que es la gran incidencia que enfrentan los países en Latinoamérica donde aquella viene vulnerando en demasía las garantías constitucionales que son inherente a un sujeto.

La institución cautelar del presente estudio, deviene a una restricción de derechos esenciales de un sujeto en un estado de derecho, teniendo en conocimiento que la libertad es uno de los derechos que merman en una sociedad. Es más, dicha medida cautelar personal contiene una característica donde prima la presunción de culpabilidad.

Por esa razón, es menester realizar una remembranza histórica de las regulaciones de esta medida de coerción; por ello, según el artículo 79° del Código de P.P. de 1940 facultaba al magistrado a emitir la resolución de apertura de instrucción, teniendo la facultad de dictar la procedencia de esta medida (prisión) o evaluar su situación jurídica de la persona con una orden de comparecencia. Sin embargo, el articulado 81° del mismo cuerpo normativo, establecía la procedencia de una provisional detención del imputado siempre y cuando haya cometido el hecho delictivo, cuando lo solicite el persecutor de la acción penal y a criterio del Juez.

En ese contexto, además la Policía podía detener a un sujeto denunciado por la mera presunción de haber realizado un hecho delictivo, sin necesidad de que exista flagrancia y lo hacía con fines de investigación. Sin embargo, esta facultad no era a su libre albedrío, sino que el magistrado debía de utilizar su capacidad y ponderación para utilizar esta figura coercitiva cuando el delito era grave y cuando no ocurran estas circunstancias, decretara solamente comparecencia.

Es decir, siempre el Juez ha sido la persona preponderante en el sistema de justicia, teniendo la última palabra en cuanto a la restricción de la libertad de las personas, y que aparte de lo procesal, debía tener su criterio de conciencia bien definido.

Asimismo, debemos señalar que el antecedente de la regulación actual lo encontramos en el C. P. P., aprobado por D.L. N° 638; pese a que sus normas sobre detención fueron puestas en vigencia desde ese año. Sin embargo, se continuó su aplicación y consecuentemente generaba una vulneración de derechos fundamentales. Por lo expuesto, el Tribunal Supremo, con el oficio Circular N° 01-95-SPCSJ-1995, dispuso a todos los magistrados a nivel nacional que, ante el pronunciamiento del mandato coercitivo de detención contra un imputado, tendrían que concurrir los tres presupuestos que taxativamente establece el artículo 135° del C.P.P. de 1991 y que imponer ello, se debe aplicar los requisitos previstos, más no solo uno o dos ya que estarían actuando arbitrariamente.

Es de verse, que esta medida ha tenido diversos cambios normativos, sin embargo, el problema de fondo, no ha sido solucionado. Un procesado, que goza del derecho constitucional a la presunción de inocencia, cuando el Juez dispone la prisión cautelar, es internado en la cárcel, en el que aún no hay criterios de clasificación; por lo tanto, el preso preventivo que podría ser primario, permanecerá por periodos prolongados junto a reos condenados, que pueden ser primarios, reincidentes o prontuariados, afrontando problemas de hacinamiento y promiscuidad, además de la ineludible estigmatización social.

Por lo tanto, el artículo 268° Código Adjetivo indica los presupuestos que deben ser cumplido por el Ad-quo; el primer presupuesto nos habla de los graves y fundados elementos de convicción, ello nos habla de los indicios que tiene la fiscalía en contra del imputado y lo haya adquirido de manera legal, respetando el derecho al debido proceso en su vertiente formal y sustancial. Por otra parte, el segundo requisito nos profiere que la pena del delito debe ser superior a los cuatro años, condicionando que no en todos los delitos se puede solicitar prisión preventiva. Y el último presupuesto nos indica respecto al peligro de fuga y obstaculización, que deviene al que el imputado tiene una gran probabilidad que vaya a sustraerse de la justicia y en consecuencia evitando su presencia al momento emitir la sentencia.

En nuestro sistema jurídico penal, la medida cautelar en el presente estudio, por varios años se han estado dando diferentes audiencias respecto al requerimiento que viene presentando la fiscalía al Ad-quo de garantías; asimismo, al notarse las incidencias de esta institución procesal, el Tribunal Supremo en la ejecutoria emitida mediante la Casación N° 626-2013-Moquegua, mediante fundamento vigésimo tercero nos señala otros dos requisitos materiales adicionales y son: proporción en dicha medida cautelar y el plazo de ella misma.

Es menester indicar que, en la legislación colombiana, dicha institución procesal es la detención preventiva es privar de la libertad al imputado durante el proceso penal que va en su contra; por ende, antes de la sentencia condenatoria que decida sobre la comisión del presunto delito. La persona será privada de la libertad mientras dure el vía crucis penal; a no ser que se revoque (CPP, 2004 art. 318) o que obtenga libertad provisional en virtud de alguna de las causales establecidas en el CPP (art. 317). Al ser ambiguos los hechos ni haber certeza de la participación del sujeto en la acción delictiva y así aplicársele la restricción de la libertad, estaremos ante una privación injusta de la libertad,

derivada por la ausencia de derechos fundamentales en un proceso penal, sujeto que se verá inmerso por cuestiones insustanciales en la comisión de un acto delictivo.

Los derechos fundamentales nacen con la persona, pertenecen a todo ser humano en razón a su dignidad. Estos derechos son aquellos que constan en la ley de leyes que son preponderantes en el sistema político y están en sintonía a la dignidad humana. En ese orden de ideas, son aquellos derechos que gozan de un amparo especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma) dentro de la valoración legal. En determinados estados, están en forma taxativa o no y a su vez pueden ser tácitos.

En nuestra nación, están taxativamente normados, aunque el Tribunal Constitucional, en la praxis, está acrecentando otros derechos constitucionales con contenidos nuevos que vienen a ser casi derechos fundamentales tácitos; que están siendo citados para proteger a las personas.

En ese orden de ideas, The Canadian Charter of Rights and Freedoms profiere que:

Legal rights such as the right to life, liberty and security

Derechos legales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Por lo antes expuesto, la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, establece en su primera sección, los derechos fundamentales que tiene un sujeto de derecho en una sociedad. Conllevando ello, que se respete y no se restrinja sus derechos por una aplicación arbitraria de una medida cautelar dentro de un proceso judicial.

Aunado a ello, según German Federal Constitutional Court, profiere que:

The starting point is that the Convention is incorporated into German law by way of statute only; at the national level, the Convention ranks below the Basic Law (paras. 86-87). The ECHR does, however, serve as an "aid to interpretation" (Auslegungshilfe) of German fundamental rights and the rule-of-law principles of the Basic Law. The provisions of the Basic Law are to be construed in a manner that is open to international law (volkerrechtsfreundlich) (paras. 86, 89).

El punto de partida es que la Convención se incorpora a la ley alemana solo por ley; a nivel nacional, la Convención se ubica por debajo de la Ley Fundamental (párrs. 86-87). Sin embargo, el CEDH sirve como una "ayuda a la interpretación" (Auslegungshilfe) de los derechos fundamentales alemanes y los principios del

estado de derecho de la Ley Fundamental. Las disposiciones de la Ley Fundamental deben interpretarse de manera abierta al derecho internacional (volkerrechtsfreundlich) (párrs. 86, 89).

Por lo antes señalado, se advierte que la mayoría de los países en cuestión de derechos fundamentales se apoyan en la legislación supranacional, en este caso es Alemania. Es por ello, que es elemental el respecto sobre ellas y que los operadores de justicia cautelen ello.

Las garantías del debido proceso tienen como fin la protección de los derechos humanos del imputado o acusado en todo el proceso penal, de tal manera que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos que le reconoce la constitución y las normas supranacionales. Es menester proferir que, en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, en su considerando A.1, fundamento 6, nos manifiesta que el debido proceso doctrinariamente tiene dos vertientes: la primera es el orden procesal que abarca o incluyen las garantías mínimas que tiene un sujeto dentro de un proceso entre ellos se encuentran: el derecho a impugnar, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído entre otros derecho y la segunda vertiente es la sustantivo, en la cual, el pleno nos indica que está referido al derecho a exigir una decisión justa.

Por otra parte, el respeto a la garantía constitucional del debido proceso, hace valer el derecho a la seguridad jurídica del imputado o acusado mientras va en trámite el curso penal, porque se frena toda acción abusiva de la fuerza represiva y de los magistrados; las garantías al debido proceso están explícitamente señaladas en las normas supranacionales, las legislaciones de la república y la jurisprudencia, en concordancia con el articulado 139° de nuestra Carga Magna.

En la actualidad, el exceso de carcelería en nuestro sistema de justicia atraviesa una gran incidencia en los procesos penales, cuando el fiscal solicita al Juez de Garantías, su requerimiento sea por el plazo de 9, 18 o 36 meses; y dicha solicitud procede con el fin de que se realice los actos de investigación establecidos. Pero el problema se genera cuando el plazo establecido excede y en consecuencia eso genera que el imputado se vulnere sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad personal, derecho al debido proceso y el derecho a que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En relación con lo antes expuesto, según el Expediente N° 160-2014-316 del Primer J.I.P. del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde resuelve la solicitud de libertad procesal del imputado Luis Humberto Arroyo Rojas; toda vez, que dicho imputado solicitó al Juez su libertad procesal por exceso de carcelería, al amparo de los artículos 273 y 274 del C.P.P, el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 01-2017/CIJ-116 - Fundamento N° 25; y el artículo VII del Título Preliminar del C.P.P., ya que había transcurrido 4 años desde que el Juez decidió otorgar 36 meses de prisión preventiva; y hasta la fecha de la solicitud del imputado, no existía algún requerimiento de sobreseimiento o acusación y sobre todo que se ha transcurrido el plazo de la prisión preventiva de manera excesiva. Por ello, en el fundamento N° 13 de la presente resolución dan la razón al imputado que existe un exceso de carcelería y se está vulnerando sus derechos fundamentales y en consecuencia declaran fundado de solicitud.

Asimismo, en nuestra actualidad la presión mediática ejercida por los medios televisivos ante los casos emblemáticos en los delitos contra la administración pública es notoria, ya que adelantan opinión creyendo ellos que la información que facilitan se debe hacer o establecer, no importando, si está conforme a derecho. Causando ello, un daño a la sociedad, porque las personas que no están asociadas al derecho, creen que lo que informan es veraz y correcto y dicha información errónea repercute en las personas; y ello genera que dicha presión como consecuencia pueda influir en las decisiones que puedan tomar los jueces.

En la misma línea de ideas, el jurista argentino Zaffaroni, E. (2013) nos señala que:

[...] La criminología mediática, ejerce un rol, indirecto pero que, esencialmente, repercute en el día a día de las personas, aunque sean de cualquier sociedad. A partir de ello, vamos a compartir algunas de las apreciaciones que el jurista argentino desarrolla sobre la misma [...] la información mediática televisiva se encuentra englobada muchas veces. Por patrones socioculturales que perjudican a las personas; [...] siempre ha existido la criminología mediática y siempre apela a una creación de la realidad a través de información, sub información y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal simplista asentada en casualidad mágica.

Siguiendo con la línea antes expuesta, se puede proferir que en nuestra actualidad los medios de prensa, realizan una labor elemental en facilitar información al público en general; la incidencia se genera cuando informan de manera inadecuada y con ello generan repercusiones negativas, ya que dicha información que facilitan respecto a los casos emblemáticos en nuestro sistema de justicia, como bien explicó el autor repercute en el día a día de las personas, por ende, en la actualidad se observa que los magistrado al resolver la procedencia de requerimiento de dicha medida cautelar, están vulnerando las garantías constitucionales, esto debe suceder.

En la actualidad, los medios de prensa ejercen un rol elemental, ya que una de sus características esencial es la libre expresión que se encuentra tutelada en nuestra Carta Magna; sin embargo, ejercen un control respecto a las decisiones tomadas por los órganos jurisdiccionales, todo ello, para que sea conforme a lo que indica la ley. La incidencia, se torna cuando informan sobre asuntos judiciales, que pueden influir en las personas que reciben dicha información, toda vez, que adelantan opiniones o veredicto que anticipa la imputabilidad de la persona, aunque todavía no esté sentenciado. En demérito, a sus derechos emanados por la Constitución como es la presunción de inocencia y el honor; no es una realidad aislada la influencia negativa en los juicios mediáticos en nuestra realidad donde tienen la facultad de ejercer sobre la investigación, la imparcialidad y la independencia del Ad-quo.

Al avanzar la tecnología, en un mundo globalizado, los medios de comunicación se han encumbrado como un nuevo poder que domina y está presente día a día en nuestras sociedades. Se denominan como el cuarto poder y se han transformado en la columna del poder actual bajo el binomio sociedad-información.

El Perú no es ajeno a ello, a tal punto que se convirtió en un ente mediático. De pronto, dicho poder al no tener normatividad o deficiente regulación, influyo a que los medios de comunicación tradicionales y modernos cayeran inducidos a la información direccionada, y que específicamente la notis criminis se convirtió en morbosidad que, fueron azuzados por los propietarios de dichos medios de comunicación, lo cual trajo réditos económicos exorbitantes.

Es así, que los periodistas literalmente se matan para obtener y publicar las primicias sobre casos emblemáticos, no siendo extraño que se filtren las imágenes de los detenidos a través de la televisión, a quienes incluso se les entrevista, y se publican sus fotos y sus nombres en los periódicos, apareciendo enmarcados; vulnerándose groseramente la presunción de inocencia, esto es volver a las cavernas denigrando el derecho de ultima ratio moderno, ya que dichos sujetos son satanizados previamente, lo que es más gravoso que la sentencia en sí.

Asimismo, la presente investigación plantea como problema general: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática? En consecuencia, planteamos como problema específico N° 01: ¿De qué forma el exceso de carcelería vulnera el debido proceso? y como problema específico N° 02: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?.

La justificación teórica del presente trabajo, pretende aportar con el estudio teórico en torno a la problemática de la vulneración de los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática. En tal sentido, la presente investigación planteara la modificación del artículo 268° del Código Adjetivo por medio de la adición de un inciso.

La justificación práctica, de esta investigación pretende implementar un nuevo inciso al artículo 268° del Código Adjetivo, a efectos que se puedan dar los tres presupuestos materiales y se respeten las garantías fundamentales de las personas inmersas en este proceso, toda vez que, en la actualidad los magistrados al aplicar la prisión preventiva son influenciados por la presión mediática, lo que deviene a la vulneración de los derechos fundamentales de los imputados.

La justificación metodológica del presente trabajo se estableció los parámetros del método científico, por lo que se hará uso de las reglas del proyecto de investigación; con la finalidad de garantizar la objetividad y consistencia de los resultados obtenidos.

En el desarrollo de proyecto de investigación de cualidades, se pueden plantear objetivos y supuestos. Ellos se pueden plantear en el transcurso de la tesis. En tanto, es importante señalar

los objetivos, que son el objetivo principal y dos objetivos específicos.

Por lo antes expuesto, la presente tesis tiene como objetivo general. ¿Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?. Asimismo, planteamos como objetivo específico N° 01: ¿Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso? Y como objetivo específico N° 02: ¿Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?.

A lo antes expuesto, la investigación en cuestión plantea como supuesto general: La vulneración de los derechos fundamentales se da cuando se declara procedente el requerimiento de prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales de manera copulativa, que señala el artículo 268° del Código Procesal Penal. En consecuencia, planteamos como supuesto específico N° 01: El exceso de carcelería vulnera el debido proceso a consecuencia de no cumplirse los plazos establecidos en el Código Procesal Penal en torno a la Prisión Preventiva. Y como supuesto específico N° 02: El ordenamiento jurídico procesal penal vigente, contribuye de manera insuficiente en la aplicación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva.

II. MÉTODO

2.1 Tipo y Diseño de investigación

El presente trabajo de tesis corresponde a un tipo de investigación explicativa-descriptiva, toda vez que se explicará en relación a la problemática en donde dos o más caracteres se relacionan; sin embargo, el objetivo será describir cómo se manifiesta la figura procesa que se está desarrollando en el presente estudio.

En la misma línea de ideas, esta tesis se aplica el tipo explicativo porque se va a desarrollar en relación entre la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. Y es descriptiva porque se narrará la forma por la cual el sistema procesal penal peruano en la actualidad, se viene aplicar de manera desproporcionar está media provisional y con ello vulnerando derechos fundamentales.

Por tanto, el diseño de investigación de la presente tesis es teoría fundamentada, toda vez que deviene de una argumentación desde un aspecto jurídico y lógico. Por ello, se tiene como base la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional.

2.2 Escenario de estudio

La presente tesis, el escenario de estudio será en el Distrito Judicial del Callao.

2.3 Participantes

Las personas que participan en esta tesis son expertos en la materia penal y procesal penal, por ende, tiene años de experiencia en dichos temas; donde en el presente proyecto facilitaran sus conocimientos, respecto a la problemática de la investigación.

Mediante el presente proceso, los investigadores buscan definir quiénes son los participantes respecto a la entrevista a realizar y ellos son:

	Nombres y apellidos	Profesión u Oficio	Experiencia	Cargo
1	Juan Carlos Pérez Lacca	Abogado penalista	20 años	Jefe del Estudio Jurídico Pérez Lacca.

2	Guillermo Vines Escobar	Abogado penalista	30 años	Jefe del Estudio Jurídico Vines Escobar
3	Sergio Martin Núñez	Abogado Penalista	15 años	Juez Titular Penal del Colegiado Permanente del Callao (2do Miembro)
4	Rubén Valerio Soto Urbina	Abogado Penalista	5 años	Ex Juez Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
5	Mónica Sisi Visalot Paredes	Abogada Penalista	22 años	Fiscal Provincial de la 10° F.C.P. del Callao.

(Fuente: Elaboración propia).

2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos

En un estudio cualitativo como el presente trabajo, la recolección de datos es relevante, toda vez que al obtener dichos datos se convertirían en información. Mediante las técnicas se analizará la manera de cómo se van a obtener los datos y de qué forma utiliza el investigador para acercarse al fenómeno de su estudio y poner extraer información. Para nuestra investigación, se utilizarán como técnicas la entrevista y análisis documental y como instrumentos la guía de entrevistas y guías de análisis documental.

2.5 Procedimiento

La información recolectada es importante, toda vez, sirve para poder explicar, describir y conocer a cerca del problema de la tesis; esta se ha establecido teniendo en cuenta las características del entrevistado. Asimismo, las entrevistas se realizan en los lugares donde laboran los entrevistados, así permitiendo observar y conocer el escenario de estudio.

CATEGORÍA	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	SUBCATEGORÍAS
La vulneración de los derechos fundamentales.	(Exp. N° 502- 2018 – CASO HUMALA). Fundamento 130 – En cualquier caso, teniendo en cuenta que estos derechos elementales son proyectables, más allá de la denominación que se le dé al recurso impugnatorio, y tratándose del debate de esta medida, la sola precisión de una vulneración de un derecho constitucional, siempre deberá ser admitido.	- La vulneración de los derechos fundamentales. - Garantías del debido proceso.
En la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática.	(Exp. N° 502- 2018 – CASO HUMALA). Fundamento 139 – Excepcionalmente, lo constituye las injerencias sobre los jueces, directamente encargados de decidir esta aplicación, por ejemplo: la injerencia de altos funcionarios del Estado, las cúpulas de los poderes y los medios de comunicación y la opinión pública.	- La prisión preventiva. - La presión mediática.

(Fuente: Elaboración propia).

2.6 Métodos de análisis de información

Los métodos jurídicos son elementales para argumentar la presente tesis, en la cual son los siguientes:

Análisis sistemático	Análisis Exegético	Análisis Hermenéutico
Este análisis permite integrar conceptos, principios y normas con la finalidad de esclarecer la estructura normativa e interpretarlo de manera idónea.	Es elemental dicho análisis ya que aplicaremos el estudio de normas jurídicas tal como aparecen en el texto normativo, sin necesidad de alterar el significado de ellas.	Dicho análisis lo que pretende es la interpretación de la normas, principios y textos jurídicos de manera coherente y sistemática para utilizar

		de manera congruente.
--	--	-----------------------

(Fuente: Elaboración propia).

2.7 Aspectos éticos

Esta tesis, se ha efectuado bajo el rigor científico establecido, en la cual, se ha aplicado la metodología de investigación que conlleva a describir el fenómeno, siguiendo reglas de estas. Asimismo, se han respetado el derecho de autor, se han consignado las referencias de los autores, con las debidas citas al estilo de la norma APA. Asimismo, es importante recalcar, que esta tesis ha cumplido con pasar el sistema TURNITI, adjuntándose el documento que acredita y respalda la verificación de las fuentes de información.

III. RESULTADOS

Es en esta parte de la investigación en que se realiza la descripción de los resultados obtenidos en base a los instrumentos de recolección de datos, teniéndose en cuenta los objetivos de la tesis y sus respectivas preguntas.

Asimismo, la guía de entrevista estuvo conformada por preguntas que van en la línea para la consecución del objetivo general y los objetivos específicos uno y dos, cada uno de ellos con sus respectivas preguntas. En tal sentido, es menester exhibir las respuestas de las entrevistas realizadas:

OBJETIVO GENERAL

Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática

PREGUNTA NRO. 01.- ¿Considera usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?

VINCES (2019) sostiene que, si se dejan influenciar por la prensa, cuando su deber es ser independientes e imparciales.

PEREZ (2019) indica, claro que sí, ese es un hecho que se ve a diario en los medios de comunicación, los jueces tienen temor a ser justos y ceden a la presión mediática.

VISALOT (2019) señala que, los magistrados como seres humanos tienen intereses personales y profesionales propios. Sin embargo, su cargo les exige estar dotados de los más altos valores éticos de objetividad, imparcialidad e independencia para desempeñar sus funciones, por ello la presión mediática influirá en sus decisiones dependiendo de la interiorización que tengan de los valores éticos con que deben conducirse, por ello los magistrados si son susceptibles de dejarse influenciar por la presión mediática.

SOTO (2019) señaló, a mi parecer, y en mi experiencia como Ex Juez Penal de primera instancia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, es en realidad analizar cada caso en concreto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta al Magistrado la libre discrecionalidad, que ello, habla del criterio de cada funcionario público encargado de administrar justicia en los órganos jurisdiccionales, en resolver o tomar decisión como

mejor corresponde conforme a derecho. Asimismo, en los casos mediáticos que se ha visto en todo estos dos o tres últimos años, y respondiendo la pregunta en concreto, considero que la manera que se vulnera los derechos fundamentales de las personas es cuando el Ad-quo aplica de manera errónea los presupuestos materiales que se encuentran regulados en el Artículo 268° del Código Procesal Penal, ya que se entiende que se debe cumplir de manera copulativa los tres presupuestos antes en mención pero en dichos casos emblemáticos, los medios de prensa son tan intensos y perseverantes, además adelantan opinión del tema no siendo especialista ni conocedores del derecho, tal vez, por su propio interés pero hay mucha posibilidad que influya categóricamente en la decisión que pueda tomar un Juez.

NUÑEZ (2019) profiere que, sí, considero que la presión mediática condiciona el comportamiento no solo de un juez, sino también el de un fiscal. Así, no solo quien, finalmente, otorga la medida se encuentra subordinado a la presión mediática, sino también quien solicita que se imponga dicha medida. Ello, entre otros factores, se debe a la exposición del magistrado ante la desaprobación de la opinión pública.

De los entrevistados, 4 señalaron que la presión mediática si influye en los magistrados al aplicar la prisión preventiva, y 1 de los entrevistados señalo que se debe analizar cada caso en concreto.

PREGUNTA NRO. 02.- ¿En su opinión, cual es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

VINCES (2019) indico, la presión mediática (la del periodismo) de cómo debe de fallar un asunto sub jurice, sea a favor de la persona acusada o en su contra, presionando a los jueces a que resuelvan un caso en el sentido que preconiza el medio.

PEREZ (2019) señalo, es muy importante, ya que los medios de comunicación influyen en los jueces para que declaren fundados los requerimientos de prisión preventiva. Asimismo, de acuerdo a sus intereses tratan en todo momento que los jueces fallen en sentido a sus intereses.

VISALOT (2019) preciso, su importancia radica en el hecho que, al mediatizarse un caso, los criterios de objetividad, imparcialidad e independencia con que deben resolverse una solicitud de prisión preventiva se relativizan y se soslayan el estricto cumplimiento de los

tres requisitos de procedencia para imponer la medida de prisión preventiva (art. 268 CPP) para responder a intereses de los medios de comunicación (económicos o políticos) que incitan a una falsa alarma social.

SOTO (2019) manifiesta que, en mi opinión, la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva es relativa ya que es analizar cada caso que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva y analizar cuál es la decisión del Juez de Garantías, y ver si los medios de comunicación realizan o generan alguna opinión al respecto. Empero, si es un caso mediático como el Caso Lava Jato, Caso Keiko Fujimori o el Caso Odebrecht; los medios de comunicación son visible y notorio el interés sobre esos casos ya que dichas acciones ilícitas, se encuentran involucradas personas públicas de diferentes rubros y en ciertos casos adelantan opiniones y ejercen un rol de intimidación que indirectamente puede influenciar al Juez.

NUÑEZ (2019) considera que, en teoría todo juez es independiente y la presión mediática no debería tener ninguna relación en la aplicación de una medida como la prisión preventiva que es un instrumento que busca asegurar la presencia del imputado a fin de mantener el correcto funcionamiento de un proceso penal; sin embargo, la presión mediática se convierte en un factor con amplia relevancia, en tanto, su uso arbitrario vulnera derechos del imputado, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad y objetividad con la que debe ser juzgado.

De los entrevistados, 3 indicaron que la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva radica en que pueden influir a favor de sus intereses, otro entrevistado señaló que su importancia es relativa y un último preciso que se convierte en un factor de amplia relevancia si de su uso arbitrario se van a vulnerar derechos del imputado.

PREGUNTA NRO. 3.- ¿Cree usted que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

VINCES (2019) señaló, si se vulnera el derecho de presunción de inocencia, tipificado en la Constitución política del estado.

PEREZ (2019) indico, por supuesto que se vulneran todos los derechos fundamentales de las personas. Una arbitraria aplicación de la prisión preventiva hace a una persona muy

infeliz, ya que el proyecto de vida que tenía podía quedar trunco.

VISALOT (2019) menciona, en efecto se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia (art. 2 acápite 24 inc “c”) Constitución política del Perú, pues al procederse a una detención preventiva, se produce una estigmatización del investigado, pues al haberse publicitado dicha situación, convierte a esta medida personal cautelar en una pena anticipada, sin que se haya establecido judicialmente responsabilidad penal; en consecuencia, se produce agravio al investigado, se vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales, se abona a un abuso de autoridad que quedara impune.

SOTO (2019) indica que, a mi parecer, sí. Porque, una aplicación arbitraria de una norma penal y sobre todo con una medida cautelar provisional que restringe la libertad personal de un imputado (s), puede generar una vulneración de derechos fundamentos como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; asimismo, se tiene en conocimiento que el Juez de Investigación Preparatoria es un Juez de Garantías y como bien establece el pretérito garantiza el respeto y sobre todo cautelar los derechos fundamentales que se encuentran previsto en la Constitución Política del Perú. Por tanto, a correlación también es menester señalar, se vulnera los derechos fundamentales cuando no existe una correcta aplicación de esta medida, ya que en diferente jurisprudencia nacional como internacional hay establecido parámetros y sobre todo que es excepcional.

NUÑEZ (2019) manifiesta que, sí, el uso desproporcionado y arbitrario de una medida de coerción de ese tipo no solo vulnera derechos fundamentales de un imputado, sino que, además, trae consigo daños relacionados al ámbito personal, social y laboral. De este modo, el derecho a la libertad es solo un factor dentro de los tantos otros derechos afectados de corte procesal y constitucional. Cabe precisar que su sola transmisión por el canal de Justicia TV ya está afectando la presunción de inocencia que le asiste a los imputados pues se da una proyección de culpabilidad ante la opinión pública que no necesariamente conocen de Derecho.

De los 5 entrevistados, todos coincidieron en señalar que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso.

PREGUNTA NRO 4.- ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

VINCES (2019) considera que, los magistrados quienes imparten justicia tienen la obligación de analizar la constitución política del estado, en cuanto se refiere a la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que la prisión preventiva acarrea efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables a la persona del investigado.

PEREZ (2019) sostiene que, si lo considera, ya que el debido proceso abarca una serie de derechos que tienen los imputados y uno de ellos es la que una persona no puede estar en la cárcel más tiempo del debido.

VISALOT (2019) indico, en efecto el debido proceso exige el respeto irrestricto de las garantías procesales y constitucionales , y sean cualesquiera los plazos establecidos para la prisión preventiva, sean estos 9, 18 o 36 meses, ello atenta el principio de legalidad pues se mantiene a una persona privada de su libertad (derecho al libre tránsito) sin una sentencia judicial condenatoria y firme , y afecta el principio de presunción de inocencia al privarse en forma prolongada la libertad sin el sustento de una condena judicial.

SOTO (2019) profiere que, sí, pero además de vulnerar el debido proceso, también vulnera el derecho a la libertad de una persona; pero porque sucede esta figura; el representante del Ministerio Público, presenta su requerimiento de prisión preventiva en un caso simple que el plazo es 9 meses, al declararse fundado dicho requerimiento, el fiscal debe realizar los actos de investigación pero que pasa en la praxis, que no llevan el conteo del plazo de la prisión preventiva y en consecuencia, se vence el plazo previsto, pero el fiscal, como solución a ello y desean que el imputado no salga el libertad, presenta la prolongación por el mismo tiempo, no habiendo avanzando ningún actos de investigación y sobre todo, que cuando presenta el escrito al órgano jurisdiccional tiene

72 horas para proveer el escrito y consecuente señalar fecha de audiencia, pero esos días que pasa en un Establecimiento Penitenciario por exceder el plazo establecido el juzgado, ahí entra a tallar la vulneración del debido proceso y el derecho a la libertad por el exceso de carcelería.

NUÑEZ (2019) considera que, si tenemos en cuenta que el debido proceso es un canon de control de la constitucionalidad de los procesos judiciales, además de un derecho-principio, su importancia radica en que este no solo protege su contenido en sí mismo, sino que, también, lo hace respecto a otros derechos conexos tales como el derecho a la defensa, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la cosa juzgada, la pluralidad de instancias, el juez determinado por ley, entre otros. Bajo ello, el exceso de carcelería evidencia un desenvolvimiento deficiente de un proceso penal, por lo que, de manera indefectible, hay una vulneración a los derechos de quien sufre tal privación de su libertad.

De los 5 entrevistados, todos coinciden en señalar que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso, además uno de ellos amplió su respuesta indicando que también se vulnera el derecho a la libertad personal.

PREGUNTA NRO 5.- ¿Considera usted que el exceso de carcelería viene a ser una pena anticipada?

VINCES (2019) manifiesta que no es una pena anticipada.

PEREZ (2019) indico, así es, viene a ser una pena anticipada ya que la persona no puede estar presa sin una sentencia judicial.

VISALOT (2019) considera, debido a los excesivos plazos otorgados a la prisión preventiva, esta se convierte en una pena anticipada, el problema de la vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando el ministerio público, no logra probar el delito imputado y se procede a la absolución de los cargos penales, sin embargo, ningún magistrado del poder judicial ni del ministerio público se hace responsable por haber privado de la libertad a una persona en forma indebida.

SOTO (2019) sostiene que, no.

NUÑEZ (2019) manifiesta que, el exceso de carcelería no debería entenderse como una pena anticipada, sino como una muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario. En muchas ocasiones, el exceso de carcelería se da debido a la falta de una actuación oportuna por parte del Ministerio Público para avanzar en el proceso o ante un tardío desarrollo del juicio. Al respecto, cabe acotar que el exceso de carcelería no solo es un problema social, sino que, además, representa un incumplimiento del Estado en cuanto a sus deberes internacionales sobre la protección integral de los reos.

De los 5 entrevistados, 2 de ellos consideran que el exceso de carcelería viene a ser una pena anticipada, otros 2 no lo consideran así, y 1 lo considera como una muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario.

PREGUNTA NRO 6.- ¿Usted cree que el exceso de carcelería vulnera derechos fundamentales, fundamente su respuesta?

VINCES (2019) sostiene, que el exceso de carcelería vulnera los derechos fundamentales de la persona, le causa un daño social y jurídico. Por eso la medida cautelar que prive la libertad debe ser utilizada con mucho cuidado por parte de los jueces y deben ser excepcionales.

PEREZ (2019) indicó, que sí creo que vulnera los derechos fundamentales siendo que la libertad es el derecho más preciados después del derecho a la vida.

VISALOT (2019) precisó, que el exceso de carcelería , en cualquier caso afecta derechos fundamentales de libertad y libre tránsito, por ello la limitación de este derecho solo debería proceder en flagrancia de un delito grave de carácter violento que afecte la vida, salud o libertad de una persona , no en todos los delitos, debiendo procederse a la privación de la libertad luego de establecer responsabilidad penal con un debido proceso, luego que la sentencia quede consentida en todos los demás casos.

SOTO (2019) indica que, sí. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo establecido que el imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución en contrario respecto a su estado a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

NUÑEZ (2019) considera que, el exceso de carcelería de manera inevitable vulnera

derechos fundamentales, ello en tanto que este significa que determinada persona se encuentra privada de su libertad sin mayor justificación o sin mayor resultado en cuanto al avance del proceso penal se refiere. De este modo, lejos de que se obtenga de justicia, lo que se produce es que determinada persona se encuentre en estado de vulnerabilidad sobre el ejercicio y desarrollo de sus derechos de corte procesal, social, económicos. Aunado a ello, son sus derechos fundamentales los que se ven comprometidos, pues hay una privación o limitación para ejercer derechos básicos que encuentran fundamento en la dignidad del ser humano.

De los 5 entrevistados, todos consideraron que efectivamente creen que el exceso de carcelería vulnera derechos fundamentales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva

PREGUNTA NRO 7.- ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?

VINCES (2019) señaló que la obstaculización de la acción de la justicia en el desarrollo del proceso. (Peligro de obstaculización).

PEREZ (2019) sostiene que el de los graves y fundados elementos de convicción ya que, si no hay estos, no hay caso.

VISALOT (2019) indicó, de los tres requisitos lo que más influye es la prognosis de la pena, una pena alta hará que el magistrado del ministerio público o del poder judicial pierda objetividad para sustentar una prisión, aun cuando no se configuren debidamente los otros requisitos de procedencia para la prisión que requiere la existencia de fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, soslayando los arraigos familiares, sociales y laborales, sin tener en cuenta que el investigado no representa un peligro para la obstaculización de la investigación o que no pretenda eludir la justicia.

SOTO (2019) manifiesta que, a mi parecer, son dos

Los graves y fundados elementos de convicción y;

El peligro de fuga y obstaculización.

NÚÑEZ (2019) considero que el peligro procesal y, en concreto, el arraigo del imputado es aquel que más influye. Ahora, ello representa un problema, ya que el arraigo encuentra fundamento en que determinada persona tenga un domicilio estable, un asiento familiar, estabilidad laboral o cualquier otro elemento de similar naturaleza que permita al juez colegir que el imputado no eludirá la acción de la justicia. Bajo lo indicado, ocurre que gran parte de la población que se encuentra sometida a un proceso penal se encuentra en estado de precariedad, lo cual conlleva a que sean las personas de estratos sociales más bajos quienes se vean afectados por una medida cautelar de uso extraordinario como la prisión preventiva, pues es este grupo social, en general, el que forma o basa sus vínculos en relaciones informales, ello ya sea en cuanto al ámbito social o laboral. En consecuencia, el no tener forma de acreditar estos elementos más allá de lo que el imputado pueda exponer, representa un punto débil a tener en cuenta, más aún si se considera que la gran mayoría de los jueces tienen una formación netamente formalista en cuanto a la aplicación de la ley se refiere.

De los 5 entrevistados, 2 de ellos señalaron que el peligro procesal es el presupuesto material de la prisión preventiva que más influye en la aplicación de esta medida coercitiva, 1 indico que el presupuesto de la prognosis de la pena es el que más influye, otro indico que son dos los graves y fundados elementos de convicción y el peligro de fuga y obstaculización. Y un último preciso que es el de los graves y fundados elementos de convicción.

PREGUNTA NRO 8.- ¿Cree usted si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.

VINCES (2019) precisó, al, aplicar injustamente la prisión preventiva, el juez estaría cometiendo un delito, porque el artículo 268 del código establece los presupuestos materiales para poder solicitar la prisión preventiva, la cual solo la puede dictar a pedido del ministerio público.

PEREZ (2019) indicó, que el juez cometería un delito, ya que está mandando a prisión a una persona que es inocente, es algo arbitrario e ilegal; también el fiscal al incoar una prisión preventiva comete un delito ya que es defensor de la legalidad.

VISALOT (2019) manifestó, una decisión judicial no amparada en derecho es susceptible de ser considerada un acto arbitrario (abuso de autoridad), conducta antijurídica sancionada por el artículo 376 del código penal ; así también dicha conducta alejada de las verificaciones procesales del artículo 268 del código procesal penal podría encuadrarse dentro de la descripción del delito de prevaricato (artículo 418 del Código Penal); ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueda establecer una acción de garantía (habeas corpus) de declararse fundada o las sanciones administrativas que pueda acarrear la inconducta del magistrado al resolver en forma ilegal una prisión preventiva indebida.

SOTO (2019) considera que, a mi criterio personal, si un imputado estando en una investigación y la fiscalía presenta un requerimiento con dicha medida cautelar personal, y no cumple con los tres presupuestos materiales establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, se debe declarar infundado y, en consecuencia, poner otra medida de coerción menos gravosa. Siguiendo con la misma línea de ideas, el Juez tiene la facultad por su libre discrecionalidad resolver conforme a derecho respecto a su criterio y por ello, no calificaría como una infracción ya que el Juez tiene la facultad de administrar justicia, y tampoco sería un delito o ilegalidad. Ya que, si el juez en su criterio declara fundado dicho requerimiento, tendrá que realizar una debida motivación de dicho auto; y las partes si no se encuentran conforme puede presentar el recurso que crean pertinente. Pero la incidencia se genera, ya que no está establecido taxativamente en el articulado antes en mención que los presupuestos materiales se deban cumplir de manera copulativa.

NUÑEZ (2019) considera que, naturalmente, primero estaría ante una falta administrativa al no motivar debidamente su resolución y ello traería como consecuencia la imposición de una sanción por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. De otro lado, si se invoca hechos falsos o no se valora elementos de convicción inexistentes, también podría consumarse un delito como es el prevaricato.

De 5 entrevistados, 4 de ellos señalaron que, sí un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez la aplicaría, cometería delito y tan solo 1 de ellos indico que el juez no cometería ni delito, ni infracción ni ilegalidad en tanto cuenta con su facultad de discrecionalidad.

PREGUNTA NRO 09.- ¿Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268 del código procesal penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva?

VINCES (2019) señalo, si estuviese de acuerdo y que se aplique rigurosamente para su aplicación.

PEREZ (2019) indico, si estaría de acuerdo, porque ya no le dejaría al juez una capacidad discrecional y a su vez ya existiría algo taxativo, ya que el juez no podría hacer interpretaciones infundadas.

VISALOT (2019) preciso, lo que debería establecer el artículo 268 del código procesal penal ante la verificación de declarar procedente una prisión preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es responsabilidad funcional tanto del ministerio público o el poder judicial, pues a mi criterio una medida tan gravosa como perder la libertad solo se justifica en caso de flagrancia de un delito grave de carácter violento que afecte la vida, la salud o la libertad de la víctima en forma definitiva y no para otro tipo de delitos.

SOTO (2019) profiere que, sí, estoy de acuerdo. Ya que, en la actualidad en la mayoría de los casos que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva, el juez declara fundado y muchas veces no cumpliéndose los tres presupuestos materiales establecido en el código adjetivo penal; asimismo, existe jurisprudencia nacional como internacional que establecen que la prisión preventiva es de carácter excepcional, toda vez, que la regla general es la libertad y la excepción es la cárcel. En la misma línea de ideas, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha emitidos informes en el año 2017, estableciendo que nuestro país, es el que tiene el índice más alto de procedencia de prisión preventiva, llevándonos a analizar la situación a fondo de esta medida cautelar que en vez de utilizarla de manera idónea se vuelve un útil popular.

NUÑEZ (2019) profiere que, de hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha recalcado que, para ordenar la aplicación de la prisión preventiva en contra de un imputado, deben concurrir todos los requisitos que requiere la medida. En ese sentido, se tiene que, para la imposición de esta, los requisitos son concurrentes y no alternativos. No obstante, sin perjuicio de ello, es necesario establecer de manera expresa que, ante la falta de uno de los presupuestos de la prisión preventiva, esta no debiera aplicarse, más aún al considerar la naturaleza provisional y excepcional con la que cuenta.

De los 5 entrevistados, 4 de ellos si estarían de acuerdo que en el artículo 268 del código procesal penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva; y 1 de los entrevistados indico que lo que se debería de añadir que ante la verificación de declarar procedente una prisión preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es la responsabilidad funcional tanto del ministerio público o el poder judicial.

Descripción de resultados técnica: Análisis documental

En este punto de la tesis, se reflejará todos los resultados recolectados por medio del análisis documental, por ende, guardan relación con la problemática del este trabajo.

Análisis documental N° 01: Jurisprudencia.

FICHA TÉCNICA	
EXP.	: 502-2018- PHC/TC
ENTIDAD:	Tribunal Constitucional
TIPO	: Sentencia.
RECURRENTE	: Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón.
FECHA DE RES.	: 26 de abril de 2018.
PRONUNCIAMIENTO	: Pleno del Tribunal Constitucional.

OBJETIVO GENERAL

Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática

ANÁLISIS:

Con la sentencia materia de análisis, se ha llegado a demostrar que al realizar la aplicación de esta institución procesal a consecuencia de la presión mediática es una práctica constante entre los magistrados, lo que deviene en una vulneración grosera y constante de los derechos fundamentales de un sujeto de derecho. Es por ello, esta incidencia no es solo nacional, sino que se ha convertido en una práctica usual en los países de esta parte del mundo.

Análisis documental N° 02: Jurisprudencia.

FICHA TÉCNICA

EXP. : 2915-2004- PHC/TC

ENTIDAD: Tribunal Constitucional

TIPO : Sentencia.

RECURRENTE : Federico Tiberio

FECHA DE RES. : 23 de setiembre de 2014.

PRONUNCIAMIENTO : Pleno del Tribunal Constitucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso.

ANÁLISIS:

Con esta sentencia, se pueda advertir que el exceso de carcelería vulnera el debido proceso, más aún si taxativamente se señala que el plazo establecido en la normatividad procesal penal. Sin embargo, dicha incidencia genera que los imputados vean vulnerados sus derechos ya que calificaría como una situación arbitraria y desmedida.

Análisis documental N° 03: Jurisprudencia.

FICHA TÉCNICA

EXP. : 502-2018- PHC/TC

ENTIDAD: Tribunal Constitucional.

TIPO : Sentencia.

RECURRENTE : Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón.

FECHA DE RES. : 26 de abril de 2018.

PRONUNCIAMIENTO : Pleno del Tribunal Constitucional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva

ANÁLISIS:

Se precisa que, en torno a la aplicación de la prisión preventiva, se vulneran los derechos fundamentales cuando no se cumplen con los presupuestos materiales para la imposición de tan gravosa medida. Esto obedece fundamentalmente a las interpretaciones antojadizas que hacen los jueces y fiscales del articulado 268 del Código Adjetivo.

IV. DISCUSIÓN

En esta parte de nuestra investigación, haremos una sucinta discusión, contrastando los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de datos, con los antecedentes del trabajo y sus teorías.

OBJETIVO GENERAL

Explicar de qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática

SUPUESTO GENERAL

La vulneración de los derechos fundamentales se daría cuando se declara procedente el requerimiento de prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales de manera copulativa que señala el artículo 268 del código procesal penal.

De los entrevistados, una gran mayoría señaló que la presión mediática si influye en los magistrados al aplicar la prisión preventiva, y la minoría de los entrevistados señaló que se debe analizar cada caso en concreto. La mayoría preciso que la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva radica en que pueden influir a favor de sus intereses, y la minoría indicó que su importancia es relativa y que se convierte en un factor de amplia relevancia si de su uso arbitrario se van a vulnerar derechos del imputado

Los entrevistados, coincidieron en forma unánime en señalar que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva; es decir hay un consenso en torno a la abusiva aplicación de esta medida.

En cuanto al análisis de fuente documental, la sentencia del Tribunal Constitucional en torno al habeas corpus de los procesados Ollanta Humala y Nadine Heredia, es clara y precisa ya que analiza de manera firme en sus considerandos 139, 140 y 141, las múltiples injerencias y presiones mediáticas que tienen los magistrados al aplicar la prisión preventiva. Es decir, se pronuncian fehacientemente sobre los juicios paralelos que sufren las personas inmersas en procesos judiciales.

Con los resultados que se han obtenido, se ha demostrado en forma fehaciente que los derechos fundamentales son vulnerados cuando la prisión preventiva es aplicada a consecuencia de la presión mediática, en tanto, el resultado va en sintonía a la postura sustentada por los autores de los siguientes trabajos:

Por otro lado, López (2018), en su investigación profiere que, al dicta esta medida por la presión mediática, se viene efectuando de forma inadecuada, porque se está alejando del espíritu de su concepción, el cual es de ultima ratio, sin embargo, los magistrados vienen aplicando en demasía dicha medida procesal restrictiva, en sintonía con la presión que ejerce los medios de comunicación.

Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos y supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de sus conclusiones señaló que conforme a la normatividad constitucional y de otro orden vigente en lo cotidiano existe miedo de dictar dicho mandato, ya que algunos Ad-quo manejan el criterio de asegurar la presencia del imputado dentro de la investigación, empero debe ser de aspecto excepcional, como última ratio. Y la consecuencia, que ha generado ello, es que lo aplican de forma inmediata, a pesar que existen otras medidas menos gravosas que establece el Código Adjetivo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Identificar si el exceso de carcelería vulnera el debido proceso.

SUPUESTO ESPECÍFICO 1

El exceso de carcelería vulneraría el debido proceso a consecuencia de no cumplirse los plazos establecidos en el código procesal penal en torno a la prisión preventiva.

De los entrevistados, la mayoría coincide en indicar que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso, por otro lado, uno de los entrevistados amplió su respuesta indicando que también se vulnera el derecho a la

libertad personal.

De los entrevistados, están dispersas sus respuestas en tanto que solamente 2 de ellos consideran que el exceso de carcelería viene a ser una pena anticipada, por otro lado, otros 2 no lo consideran así, y tan solo 1 de los entrevistados lo considera como una muestra de un deficiente sistema de justicia, al igual que un sistema carcelario.

De los entrevistados, hubo una total unanimidad en sus respuestas ya que todos consideraron que efectivamente creen que el exceso de carcelería vulnera derechos fundamentales.

Con respecto a la discusión del análisis de fuente documental, se tiene con fecha 23 de Setiembre del año 2004, del TC pronunció la sentencia en el expediente número 2915-2004-HC/TC, recurso interpuesto por Don Federico Tiberio por Habeas corpus, en el considerando número 43 de dicha sentencia precisó que, el procesado debe llevar su juicio libre ya que siempre tiene el derecho a tener medidas menos restrictivas de su libertad, en tanto cuando fenece el plazo legal establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal, el imputado en su conducta procesal no interfirió con la investigación no vulnerando la celeridad judicial y, no obstante, todavía no se haya emitido fallo por el Ad-Quo. Aunado a ello, la comunidad jurídica se ha pronunciado y establecen que la situación antes mencionada calificaría como arbitraria.

Con la referida sentencia antes mencionada, queda demostrado que el exceso de carcelería vulnera el debido proceso, pues en muchos casos hay imputados que a pesar de que se ha cumplido el tiempo de prisión preventiva, continúan detenidos abusiva e arbitrariamente, siendo esta situación arbitraria e ilegal, por lo tanto, dicho resultado es similar a la postura sustentada por el siguiente autor:

Montalván (2014), en su trabajo de tesis titulada “Problemas de la valoración de riesgos y supervisión de la prisión preventiva en el procedimiento penal ecuatoriano”, en una de sus recomendaciones preciso, que es pertinente poner ante los ojos de la opinión pública los fallos dictados por la CIDH en contra de Ecuador, teniendo en cuenta la vulneración desmedida del encierro preventivo, la duración excesiva del proceso penal y el no

garantizar los derechos humanos de los reclusos en los centros de reclusión del país.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Determinar si se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva

SUPUESTO ESPECÍFICO 2

El ordenamiento jurídico procesal penal vigente, contribuiría de manera insuficiente en la aplicación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva.

De los entrevistados, una parte de ellos precisaron que el peligro procesal es el presupuesto material de la prisión preventiva que más influye en la aplicación de esta medida coercitiva, otra parte indicó que el presupuesto de la prognosis de la pena es el que más influye, otro indicó que son dos los graves y fundados elementos de convicción y el peligro de fuga y obstaculización. Y una minoría preciso que es el de los graves y fundados elementos de convicción

Asimismo, de los entrevistados, una gran mayoría señalaron que, sí un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el Juez la aplicaría, cometería delito y la minoría indico que el juez no cometería ni delito, ni infracción ni ilegalidad en tanto cuenta con su facultad de discrecionalidad.

Por tanto, de los entrevistados, un gran porcentaje dijo que si estarían de acuerdo que en el articulado 268 del código adjetivo, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva; y tan solo uno de los entrevistados indico que lo que se debería de añadir que ante la verificación de declarar procedente una prisión preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es la responsabilidad funcional tanto del ministerio público o el poder judicial.

Con relación a la discusión del análisis de fuente documental, el 26 de abril del 2018, el

Tribunal Constitucional, diò a conocer el fallo en torno a los procesados Ollanta Moisés Humala Tasso y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón por el Habeas Corpus que habían presentado ya que estaban cumpliendo prisión preventiva. El fallo por mayoría de los integrantes del Tribunal, declaró fundado el habeas corpus, disponiendo la inmediata libertad de ambos procesados.

En el considerando número 124 de dicho fallo señaló que en el Perú se ha implantado una forma de ver a los funcionarios públicos como personas corruptas, lo que va contrapuesto al espíritu que se tuvo al redactar la constitución que puso a la persona humana como fin supremo de la sociedad, y que por su condición de persona goza de derechos constitucionales, sobre todo el de ser considerado inocente hasta que se demuestra lo contrario en un juicio con todas las garantías procesales. Asimismo, podemos apreciar que en el considerando número 126 destaca todos los derechos preceptuados en la carta magna con los que cuenta una persona en nuestra sociedad. Con la referida sentencia antes mencionada, queda demostrado que los derechos fundamentales son vulnerados cuando no se cumplen los presupuestos materiales para la aplicación de la prisión preventiva.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones deben ser presentadas en forma objetiva según lo precisa el conocimiento científico, es aquí donde el investigador tiene que despojarse de cualquier postura que tomo durante las discusiones de la tesis y ser imparcial con las conclusiones.

PRIMERO: Los derechos fundamentales, son inherentes a la persona humana, por tanto, para que estos no se vean vulnerados por los magistrados que se dejan influenciar por la presión mediática, se tiene que capacitar en forma permanente a estos funcionarios públicos. Asimismo, la prensa debería tener un rol más objetivo al momento de informar sobre los casos mediáticos.

SEGUNDO: Con respecto al exceso de carcelería que sufre un imputado, es necesario concluir que esto es un abuso desproporcionado de los magistrados que linda con lo ilegal, de tal forma que los magistrados que incurran en esta práctica deben ser separados de la carrera jurisdiccional, ya que ese tiempo que el procesado pasa en la cárcel es un tiempo irrecuperable.

TERCERO: En esta tesis, se ha llegado a concluir, que efectivamente el ordenamiento jurídico penal, al no ser muy preciso, permite que los magistrados apliquen la prisión preventiva aun cuando no se configuren los presupuestos materiales, esto debido a la interpretación excesivamente discrecional que hacen de la norma procesal, generando como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.

VI. RECOMENDACIONES

Al finalizar la presente tesis se ha llegado a las siguientes recomendaciones:

PRIMERO: Es necesario que las oficinas de control interno, tanto del poder judicial como de la fiscalía, apoyen a sus magistrados cuando estos dicten fundada o infundada una prisión preventiva en un caso mediático, así como también informen del proceso a la opinión pública mediante sus gerencias de comunicaciones.

SEGUNDO: Los magistrados que tienen a los procesados en detención más allá del tiempo razonable, deberían ser sancionados drásticamente por las oficinas de control interno, toda vez que están vulnerando uno de los derechos más sagrados que tiene la persona, que es la libertad.

TERCERO: Que, se agregue un numeral al artículo 268 del código procesal penal, que indique taxativamente, que, a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

REFERENCIAS

FUENTES PRIMARIAS

Núñez, S. (24 de octubre de 2019) Entrevista [respuesta escrita] Magistrado Penal.

Pérez, J. (15 de octubre de 2019) Entrevista [respuesta escrita] Abogado especialista.

Soto, R. (06 de noviembre de 2019) Entrevista [respuesta escrita] ExJuez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Vinces, G (15 de octubre de 2019) Entrevista [respuesta escrita] Abogado especialista.

Visalot, M. (18 de octubre de 2019) Entrevista [respuesta escrita] Fiscal Penal.

FUENTES SECUNDARIAS

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 01-2017/CIJ-116- FUNDAMENTO 25.

Álvarez, L. (2018). Mandato indebido de prisión preventiva en la responsabilidad civil del Estado peruano en los juzgados penales de Lima – 2017. (Tesis para obtener el título profesional de Abogado). Recuperada de: repositorio.ucv.edu.pe.

Andenas, M. and Bjorge, E. (2011). German Federal Constitutional Court preventive detention relationship between international and national law European Convention on Human Rights. Recuperado: <https://go.gale.com/ps/i.do?p=PPCJ&u=univcv&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA345277979&searchId=R2&tabID=T002&linkSource=termClusters&inPS=true>

Artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991.

Artículo 268° del Código Procesal Penal.

Artículo 274 del Código Procesal Penal.

Artículo 3 de la Ley N° 30076.

Artículo 79° del Código de Procedimientos Penales de 1940.

Artículo 83° del Código de Procedimientos Penales de 1940.

Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal.

Artículos 273 del Código Procesal Penal.

Barba, J. (2015). From the qualitative research domestication to the challenge of reinventing. Recuperado de:

https://go.gale.com/ps/retrieve.do?tabID=T002&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=BasicSearchForm¤tPosition=2&docId=GALE%7CA566400515&docType=Ensayo&sort=Relevance&contentSegment=ZONEMOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA566400515&searchId=R4&userGroupName=univcv&inPS=true

Bernstein, R. (2006). "Ratification of the Constitution." The Reader's Companion to American History.

Borge, B. (2017) Truth and laws of nature in the methodology of scientific research programs. Recuperado de:

https://go.gale.com/ps/retrieve.do?tabID=T002&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=SingleTab&searchType=BasicSearchForm¤tPosition=21&docId=GALE%7CA505217251&docType=Ensayo&sort=Relevance&contentSegment=ZONEMOD1&prodId=AONE&contentSet=GALE%7CA505217251&searchId=R2&userGroupName=univcv&inPS=true

Bradley, C. (2007). Criminal Procedure A Worldwide Study. Carolina Academic Press, 2d ed., p. 85.

Bradley, C. (2007). Criminal Procedure A Worldwide Study. Carolina Academic Press, 2d ed., p. 86.

Bradley, C. (2007). Criminal Procedure A Worldwide Study. Carolina Academic Press, 2d ed., p. 58.

Bradley, C. (2007). Criminal Procedure A Worldwide Study. Carolina Academic Press, 2d ed., p. 66.

Cadenillas, R. (2018). La presión mediática de los medios de comunicación social en la aplicación de la prisión preventiva en el Perú, 2017. (Tesis para obtener el título

- profesional de abogado). Recuperada de: repositorio.ucv.edu.pe
- Canadian Charter of Rights and Freedoms,
- Canadian Charter of Rights and Freedoms, section 11
- Canadian Criminal Code, section 722.2
- Carpio, L. y Cantos, H. (2018). El abuso a la Prisión Preventiva en los Juzgados Penales del Guayas – Guayaquil. (Tesis para obtener el título profesional de abogado). Recuperada de: repositorio.ug.edu.ec.
- Casación N° 626-2013 – Moquegua.
- CIDH (2017). INFORME SOBRE EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS. Recuperado de: <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf>.
- Cuarto Pleno Casatorio Civil – Considerando A.1, fundamento 6.
- Del Rio. G. (2016) Prisión preventiva y Medidas Alternativas. Perú, Pacifico Editores S.A.C.
- European Parliament (2005). Book Debate. Recuperado de: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20050221+ITEMS+DOC+XML+V0//EN&language=ENç>
- Expediente N° 160-2014-316.
- García. S. (2014) El Debido proceso criterios de la jurisprudencia interamericana (2da Ed). DF México.
- Gutiérrez, P. (2004) La prisión provisional. España: Editorial Aranzeli.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. (5ta Ed.) DF. MÉXICO.
- Hidalgo. J (2019) Debido proceso en el derecho procesal penal. Editorial Flores. Lima.

López, C. (2018). "LA APLICACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA A CONSECUENCIA DE LA PRESION MEDIATICA EN EL PERU" (Tesis para obtener el Título Profesional de Abogada ante la Universidad Cesar Vallejo - Lima. Perú. Recuperado: repositorio.ucv.edu.pe.

Montalván, R. (2014). "PROBLEMAS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS Y SUPERVERVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO". (Tesis para optar el grado de bachiller, ante la Universidad Central de Ecuador) Recuperado: repositorio.uce.edu.ec.

Ogden, L. (2015). "Uniting the States: A Commentary on the American Constitution." Third Edition, Norderstedt, p. 76.

SALMON, E. (2012), Derechos Humanos (1ra Ed). Lima. Recuperado desde www.gobernabilidad.org.pe.

Section 34, 3d and 385 of the Canadian Criminal Code.

Section 497-499 of the Canadian Criminal Code.

Souza, F. (2015). La Detención preventiva en Colombia frente al principio de Libertad en los derechos humanos. Revista Tadeo. Recuperado desde <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/1078/1122>.

United Nations Security Council (2008). Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti. Recuperado: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/282/68/PDF/N0828268.pdf?OpenElement>

Velarde, D. y Alvarado, G. (2018). La incorrecta aplicación de la prisión preventiva, en su afectación a la Presunción de Inocencia. (Tesis para obtener el título profesional de abogado). Recuperada de: repositorio.ug.edu.ec.

Velarde, E (2016). Límites a la detención y prisión preventiva. Lima. Dialogo con la jurisprudencia Gaceta Jurídica S.A.

Zaffaroni, E. (2013). La Cuestión Criminal. (5ta Ed). Buenos Aires, Argentina Editorial Planeta. 5ta Ed., P. 295.

ANEXOS

II. CUADRO N° 01 – PROPORCIÓN GENERAL DE SUJETOS BAJO LA MEDIDA PROVISIONAL

Estado	Número de personas privadas de libertad	Número/porcentaje de procesados	Número/porcentaje de condenados	Fecha de la información
El Salvador	26,883	6,459 (24%) Procesados	20,424 (76%) Condenados	8 de octubre de 2013
Ecuador	19,177 En centros penales administrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ⁶⁷ .	9,409 (49%) No sentenciados (8,630 procesados, 377 contraventores, 402 con medidas de apremios).	9,768 (51%) Sentenciados (4,732 con sentencia ejecutoriada (25%), y 5,036 en impugnación o modificación).	Al 1 de agosto de 2012
El Salvador				
Guatemala	14,635	7,357 (50.3%) Preventivos	7,278 (49.7%) Condenados	A octubre de 2012
Honduras	12,407	6,064 (48.9%) Procesados	6,343 (51.1%) Condenadas	A abril de 2013
Nicaragua	9,168	1,127 (12.3%) Acusados	8,041 (87.7%) Condenados	Al 31 de diciembre de 2012
Panamá	14,521	9,443 (65%) En proceso A órdenes del Ministerio Público: 5,592; a órdenes del Org. Judicial: 3,135; Otros: 716.	5,078 (35%) Condenados Delitos: 4,421 Faltas: 339.	A octubre de 2012
Paraguay	7,901	5,780 (73.1%) Procesados	2,126 (26.9%) Condenados	Al 23 de septiembre de 2012
Perú	58,681	34,508 (58.8%) Procesados	24,173 (41.2%) Sentenciados	Al 31 de julio de 2012

Recuperado de: <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/informe-pp-2013-es.pdf>

III.SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL CASO HUMALA Y NADINE HEREDIA

FICHA TÉCNICA

EXP. : 502-2018- PHC/TC

ENTIDAD: Tribunal Constitucional.

TIPO : Sentencia.

RECURRENTE : Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón.

FECHA DE RES. : 26 de abril de 2018.

PRONUNCIAMIENTO : Pleno del Tribunal Constitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes abril de 2018, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera; los votos singulares de los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez; la abstención denegada del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera; y el abocamiento del magistrado Ramos Núñez aprobado en la sesión del Pleno Administrativo del 27 de febrero de 2018.

ASUNTO

Recursos de agravio constitucional interpuestos por don Jorge Luis Purizaca Furlong y Luis Alberto Otárola Peñaranda a favor de don Ollanta Moisés Humala Tasso y de doña Nadine Heredia Alarcón contra la resolución de fojas 895, de fecha 18 de octubre de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de fecha 23 de agosto de 2017; y, la resolución de fojas 444, de fecha 25 de octubre de 2017, expedida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de fecha 25 de agosto de 2017.

ANTECEDENTES

Expediente N.º 04780-2017-PHC/TC

Con fecha 23 de agosto de 2017, don Jorge Luis Purizaca Furlong interpuso demanda de hábeas corpus a favor de don Ollanta Moisés Humala Tasso y de doña Nadine Heredia Alarcón, contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, don Richard Concepción Carhuancha, y contra los Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, don Octavio Sahuanay Calsin, don Iván Quispe Auca y doña Jessica León Yarango, solicitando la nulidad de la Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017 y la Resolución 9, de fecha 3 de agosto de 2017, mediante las que se les impuso la medida de prisión preventiva. Sostiene que las cuestionadas resoluciones judiciales lesionan los derechos fundamentales a la debida motivación, al debido proceso y a la libertad personal de los favorecidos.

Alega el recurrente que el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de indicios delictivos que permitan sostener que los imputados se encuentran inmersos en los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal que justifican el dictado de



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

prisión preventiva, tal como exige el artículo 279, inciso 1, del mismo código. Es decir, sostiene que no se ha probado la presencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a los imputados como autores o partícipes del mismo, ni el peligro procesal sintetizado en peligro de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. En lugar de ello – aduce – el Ministerio Público ha pretendido acreditar la presencia de “nuevos elementos de convicción” que justificarían el dictado de la prisión preventiva, lo cual, a su criterio, viola la legalidad procesal.

Manifiesta que de la investigación fiscal no derivan graves y fundados elementos de convicción que permitan sostener que los procesados hayan recibido dinero proveniente de Venezuela y de Brasil para las campañas políticas de las elecciones de los años 2006 y 2011, ni tampoco que el origen de dicho dinero sea ilícito. Refiere que, por ello, las resoluciones cuestionadas, al basarse en hechos no corroborados, incurrir en una violación del derecho fundamental a la debida motivación, reconocido en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución.

Argumenta que, en todo caso, los supuestos “nuevos elementos de convicción”, no serían “nuevos” puesto que ya existían con anterioridad a la emisión de la orden de comparecencia con restricciones dictada contra los investigados. Este sería el caso de los elementos indiciarios vinculados a supuestos falsos aportantes a las campañas y el otorgamiento de poder a Rosa Heredia Alarcón para que pueda viajar con las menores hijas de los imputados. Cuestiona, asimismo, que en contra del procesado Humala Tasso se hayan tomado en cuenta transcripciones de audios que, según refiere, no han sido incorporados válidamente a la carpeta fiscal, que no tienen conexidad con los hechos que son materia de investigación y que no han pasado por una pericia de voz que establezca la identidad de los interlocutores.

El procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, contestó la demanda señalando que debe ser declarada improcedente, por considerar que al haberse concedido un recurso de casación excepcional contra la resolución de segunda instancia cuestionada en este proceso, ella carece de la firmeza exigida por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, sin que se verifique ningún supuesto para exceptuar la aplicación de esta regla. Agrega que la continuación de este proceso conllevaría avocarse a causas pendientes ante la jurisdicción ordinaria, contraviniendo lo establecido en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución. Sostiene que la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva se ha efectuado dentro de los parámetros previstos en el artículo 279, inciso 1, del CPP, es decir, por la existencia de nuevos elementos de convicción que la justifican. Finalmente, indica que la supuesta insuficiencia probatoria relacionada con la configuración del delito de lavado de activos no puede ser planteada en un proceso de habeas corpus, pues es materia de exclusiva valoración en el ámbito de la jurisdicción penal.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

Los jueces superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, don Octavio Cesar Sahuanay Calsin y doña María Jessica León Yarango, han contestado, individualmente, la demanda señalando que los cuestionamientos vinculados con la supuesta no acreditación de la recepción de los fondos provenientes de Venezuela y Brasil, su origen ilícito y la supuesta incorrecta interpretación del artículo 279, inciso 1, del Código Procesal Penal, no pueden ser valorados en un proceso de habeas corpus. Refieren, además, que las resoluciones judiciales cuestionadas carecen de firmeza, por haberse interpuesto un recurso de casación excepcional.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, declaró infundada la demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas carecen de firmeza y que lo que se pretende es una reevaluación de los elementos de juicio e indicios que ha valorado la jurisdicción ordinaria, lo cual escapa de las competencias de la jurisdicción constitucional.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas carecen de firmeza y que, en estricto, se pretende una revaloración de los medios probatorios.

Expediente N.º 00502-2018-PHC/TC

Con fecha 25 de agosto de 2017, don Luis Alberto Otárola Peñaranda interpuso demanda de habeas corpus a favor de don Ollanta Moisés Humala Tasso y de doña Nadine Heredia Alarcón, contra los Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones Sala Penal Especializada en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado don Octavio Cesar Sahuanay Calsin, don Iván Quispe Aucá y doña María Jessica León Yarango, solicitando la nulidad de la Resolución N.º 9, de fecha 3 de agosto de 2017, que confirmó el mandato de prisión preventiva en contra de los beneficiados emitido en el expediente N.º 00249-2015-23-5001-JR-PE-01; y como consecuencia de ello, solicita la inmediata libertad de los favorecidos, para que afronten la investigación fiscal con las medidas vigentes hasta antes de la inconstitucional expedición de la resolución cuestionada.

El recurrente sostiene que los favorecidos han sido sometidos a un proceso de investigación por parte de la Segunda Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, cuyo titular es el Fiscal Germán Juárez Atoche, con la intervención del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del Juez Richard Concepción Carhuanchó, por más de 2 años, sin que exista una acusación fiscal formulada en su contra. Agrega que los beneficiarios fueron sometidos a medidas de restricciones de su libertad (en el caso de doña Nadine Heredia Alarcón se



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

dictó un mandato de impedimento de salida y comparecencia restringida; y en el caso de don Ollanta Humala Tasso a una medida de comparecencia restringida), las cuales fueron cumplidas conforme a lo ordenado.

P

Pese a ello, con fecha 11 de julio de 2017, la Segunda Fiscalía Supranacional solicitó la variación de la medida cautelar de comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, argumentando, arbitrariamente, en una serie de considerandos que en lugar de sustentar la existencia elementos de convicción para restringir la libertad de los beneficiarios, aluden más bien a la acreditación de la comisión de ilícitos penales (lavado de activos) con la presentación de testimonios de varias personas, consignando las actas de transcripción de audios obtenidos de manera ilegal en el año 2010, y dando por cierta las declaraciones de los aspirantes a colaboradores (Marcelo Odebrecht y Jorge Simons Barata), construyendo de esta manera una lista de temas a los que atribuye un peligro procesal y obstaculización de la justicia, sin la debida contrastación probatoria.

El Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 29 de agosto de 2017, declaró liminarmente improcedente la demanda al considerar que la resolución cuestionada no se encuentra firme al haberse interpuesto contra ella un recurso de casación. Asimismo, señala que el juez constitucional del habeas corpus no es una instancia más donde deba examinarse pronunciamientos judiciales emitidos en procesos ordinarios, ni efectuarse valoraciones probatorias bajo el alegato de afectaciones de los derechos fundamentales; máxime si los favorecidos contaron intraproceso, con todos los mecanismos legales para cuestionar oportunamente el mandato de restricción de la libertad dictado en su contra.

La Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 25 de octubre de 2017, confirmó la apelada en atención a lo dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio.

1. Las demandas de habeas corpus tienen por objeto lo siguiente:

Expediente N.º 04780-2017-PHC/TC

- a) Se declare la nulidad de la Resolución N° 3, de fecha 13 de julio de 2017 (en adelante, la Resolución 3, expedida por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional (en adelante, el Juez), que revocando la comparecencia con restricciones emitida contra Ollanta Humala Tasso y Nadine

[Firma]

[Firma]

[Firma]



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

peligro de fuga; o, dar cuenta de que el investigado ocupó un cargo importante y tuvo acceso a una esfera de poder que permitiría el ocultamiento o desaparición de pruebas, a fin de justificar un peligro de obstrucción probatoria), lo que en el presente caso no ha sucedido.

124. Sobre ese tipo de valoraciones judiciales, resulta importante manifestar que, como consecuencia de la actual coyuntura social de desconfianza frente a la autoridad como consecuencia de los recientes casos de corrupción, el país en su generalidad viene viviendo en una actitud de sospecha colectiva que ha terminado colocando a la persona en general y a quien ejerce función o cargo público en particular como un sujeto considerado de suyo "proclive al delito". Es decir, se ha implantado una actitud totalmente inconstitucional, prejuiciosa y lesiva, que abdica de la lógica del Legislador Constituyente peruano, que ha optado por un sistema que considera a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, que es anterior y superior al Estado y titular de una serie de derechos que le son inherentes, denominados, más allá de las digresiones académicas que la doctrina recoge, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de la persona o derechos constitucionales; entre los cuales están el derecho al honor y a la buena reputación, el derecho a la defensa y el respeto de su dignidad, y el derecho a la presunción de inocencia mientras no se haya acreditado judicialmente su culpabilidad, mediante sentencia firme y definitiva.

125. Esa actitud, contradice totalmente el claro mandato contenido en el artículo 1 de la Constitución, que a la letra preceptúa que: "*La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado*". Este precepto muestra la lógica y filosofía del Legislador Constituyente, que en rescate del valor persona humana establece la obligación constitucional para todos, la sociedad en su conjunto y cada uno de sus miembros, así como el Estado mismo en cuanto ente nacional y conjunto de órganos e instituciones que lo integran dentro de su estructura, de defender a la persona humana, y por cierto todos sus derechos, y de respetar su dignidad, en cuanto ser humano que es el centro de la organización política, social y económica del país. Contiene entonces un mandato ineludible y que, además, encierra el concepto de solidaridad, que es imprescindible en el Estado Constitucional.

126. En esa misma línea, el artículo 2 de la Constitución enumera un conjunto de derechos, que en lo que al caso atañe, interesa destacar, además del derecho a la dignidad humana, los derechos al honor, a la buena reputación, a la intimidad y a la libertad y seguridad personales. Y, entre estos últimos derechos fundamentales, el de no ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe; el de gozar de libertad personal; el de no ser apresado por deudas, salvo la alimentaria; el de no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al

1444/1



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.º 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley; y el de ser considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad; previstos en el artículo 2, incisos 7 y 24, acápites a), b), c) y d) de la Constitución Política del Perú.

127. En lo que concierne específicamente al Estado y más especialmente a la judicatura ordinaria, el respeto a tales derechos debe ser el pivote de todo su accionar, máxime cuando se actúa en el ámbito de la justicia penal, en la cual imperan principalmente los siguientes principios: el respeto y la defensa de los derechos fundamentales; la presunción de inocencia a favor del investigado; la duda favorece al imputado; la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal pública; y la tipificación penal clara, precisa e indubitable del hecho atribuido como punible. Así, es necesario constitucionalizar el cabal ejercicio de la judicatura penal, en el marco de su autonomía e independencia, para garantizar máxima probidad, idoneidad, imparcialidad, honestidad y valentía, y, además, el cumplimiento de los principios de razonabilidad, ponderación, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia, como supremo intérprete de la Constitución, de la ley y, en general, de todo el derecho positivo.

EFFECTOS DE LA SENTENCIA

128. Dado que los argumentos que pretendieron justificar la revocatoria de la medida de comparecencia restringida de los imputados por el de prisión preventiva por el aparente incremento del peligro procesal de los imputados, carecen de una debida motivación, tal y conforme se ha analizado *supra* resultando, en definitiva, violatorios del derecho a la libertad personal, corresponde amparar la demanda y declarar nulas las Resoluciones 3 y 9 cuestionadas, y reponiendo las cosas al estado anterior, devolver la libertad de los favorecidos en las mismas condiciones que tenían al momento anterior de la emisión de las referidas resoluciones, esto es, devolver la calidad de investigados con mandatos de comparecencia restringida a los favorecidos.

Algunas consideraciones sobre la tramitación de una solicitud de prisión preventiva y su audiencia

129. El Tribunal Constitucional considera pertinente hacer referencia a algunos criterios sobre la tramitación de una solicitud de prisión preventiva que considera de importancia. Así, debe tenerse presente que en el trámite de un recurso de apelación de una prisión preventiva, no corresponde al juez de primera instancia evaluar la suficiencia o corrección de los fundamentos de Derecho o de hecho del recurso,

III. SENTENCIA DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL CASO FEDERICO TIBERIO

FICHA TÉCNICA

EXP. : 2915-2004- PHC/TC

ENTIDAD: Tribunal Constitucional.

TIPO : Sentencia.

RECURRENTE : Federico Tiberio

FECHA DE RES. : 23 de setiembre de 2014.

PRONUNCIAMIENTO : Pleno del Tribunal Constitucional.

EXP. N.º 2915-2004-HC/TCL
IMA
FEDERICO TIBERIO
BERROCAL PRUDENCIO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre del año 2004, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen; Vicepresidente, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Federico Tiberio Berrocal Prudencio contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 74, su fecha 15 de septiembre de 2004, que declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 27 de agosto de 2004, interpone acción de hábeas corpus contra el Juez de Tercer Juzgado Penal de Huaura, Dr. Miguel Alzamora Zevallos, por considerar vulnerado su derecho a la libertad personal. Refiere que se encuentra internado en el Penal de Carquin desde el 13 de febrero de 2003, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas (TID); y ostiene que a la fecha lleva más de 18 meses detenido, motivo por el cual, en aplicación del artículo 137° del Código Procesal Penal corresponde ordenar su inmediata excarcelación.

El emplazado manifiesta que el proceso es seguido contra 5 personas en agravio de 4. Sostiene que con fecha 17 de febrero de 2004, se elevaron a la Sala los informes finales; que, sin embargo, con fecha 22 de abril de 2004, el expediente fue devuelto al juzgado con la finalidad de que se amplíe el auto apertorio de instrucción en contra de un sexto imputado; y que, a la fecha, no tiene obligación de excarcelar al recurrente, puesto que el artículo 137° del Código Procesal Penal permite que el plazo máximo de detención se duplique en los procesos seguidos por el delito de TID.

El Primer Juzgado Penal de Huaura, con fecha 31 de agosto de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que el plazo máximo de detención previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal no ha vencido, puesto que el recurrente se encuentra procesado, entre otros delitos, por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el proceso seguido contra el recurrente es de naturaleza compleja, pues se investigan tres delitos; y que el plazo máximo de detención previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal no ha vencido, por cuanto uno de los delitos investigados es el de tráfico ilícito de drogas.

FUNDAMENTOS

1. El recurrente solicita que se ordene su inmediata excarcelación por considerar que se ha vencido el plazo máximo de prisión preventiva previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal (CPP), sin haberse dictado sentencia en primera instancia. En tal sentido, el derecho que se alega como vulnerado es el de no ser detenido provisionalmente más allá de un plazo razonable.

§8. De la ilegitimidad de la detención preventiva a la libertad procesal

43. La libertad procesal es un derecho del encausado a obtener la aplicación de una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva, cuando al vencimiento del plazo legal establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal, este no hubiere ejercido una defensa obstruccionista afectante del principio de celeridad judicial y, pese a ello, no se le haya dictado sentencia en primera instancia. De allí que la doctrina y la jurisprudencia comparada califiquen dicha situación como arbitraria.

La libertad procesal supone, en este caso, la previa existencia de una negligencia jurisdiccional, al haberse negado o no haberse podido juzgar al encausado dentro del plazo legal establecido en el artículo 137° del Código Procesal Penal.

La variación de la medida cautelar se sustenta en la acreditación objetiva, atribuible a la exclusiva responsabilidad del juzgador, de la vulneración del plazo razonable para sentenciar.

La modificación de la situación del justiciable no debe menguar en modo alguno la continuación del proceso, ni tampoco impedir la adopción de medidas de prevención para asegurar su éxito.

En ese orden de ideas, los presupuestos materiales que configurarían la libertad procesal serían los siguientes:

- a) Vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva.
- b) Inexistencia de una sentencia en primera instancia.
- c) Conducta procesal regular del encausado en la tramitación de la causa; vale decir, no incurrir en una defensa obstruccionista atentatoria de la celeridad y éxito judicial.

§9. Análisis de constitucionalidad del caso concreto.

44. Según quedó dicho en el FJ. 1, *supra*, el recurrente considera que debe ordenarse su inmediata libertad, pues afirma que el plazo máximo de detención previsto en el primer párrafo del artículo 137° del Código Procesal Penal, en lo que a su caso incumbe, ha vencido.
45. Del auto apertorio de instrucción obrante a fojas 24, se tiene que el recurrente se encuentra procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas, motivo por el cual el plazo máximo de detención, en su caso, no es de 18 meses –tal como erróneamente sostiene– sino de 36.

IV. ENTREVISTAS

La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión

Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática

ENTREVISTADO	:	GUILLERMO VINCES ESCOBAR
CARGO/ PROFESIÓN	:	ABOGADO
INSTITUCIÓN	:	ESTUDIO JURIDICO "VINCES"
FECHA	:	21 OCT 2019.

Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?

1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?

SI SE DEJA INFLUENCIAR POR LA PRENSA, CUANDO SU DEBER ES
SER INDEPENDIENTES E IMPARCIALES

2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

LA PRESIÓN MEDIÁTICA (LA DEL PERIODISMO) DE COMO DEBE DE FOLLOW
UN ASUNTO SUB JUDICE, SEA A FAVOR DE LA PERSONA ACUSADA
O EN SU CONTRA, PRESIONANDO A LOS JUECES A QUE RESUELVAN
UN CASO EN EL SENTIDO QUE PRECONIZA EL MEDIO

3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

Si se vulnera el derecho de Presunción de Inocencia, tipificado en la Constitución Política del Estado.

Objetivo Específico 1: ¿De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?

4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

Los administrados quienes imponen justicia tienen la obligación de salvaguardar la Constitución Política del Estado, en cuanto se refiere a la Presunción de Inocencia, teniendo en cuenta a la Presunción Presunta Preventiva produce efectos perjudiciales, irreversibles e irreparables a la persona del investigado.

5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada?

No es una pena anticipada.

6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente su respuesta.

El exceso de carcelería vulnera los derechos fundamentales de la persona, le causa un daño social y jurídico. Por eso la medida cautelar que priva la libertad debe ser utilizada con mucho cuidado por parte de los jueces y deben ser excepcionales.

Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?

7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?


Obstaculización de la acción de la justicia en el desarrollo del proceso. (Peligro de obstaculización).

8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.

Al aplicar injustamente la prisión preventiva el juez estaría cometiendo un delito. Por lo que el art. 268 del código establece los presupuestos legales para poder solicitar la prisión preventiva, lo cual solo lo puede decidir a pedido del Ministerio Público.

9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

Si estaría de acuerdo. Pero que se aplique rigurosamente para su aplicación.


 GUILLERMO VENCES ESCOBAR
 ABOGADO
 C.A. 18285 CAC-5648
 FIRMA

La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática

ENTREVISTADO : JUAN CARLOS PEREZ LACCA
CARGO/ PROFESIÓN : ABOGADO
INSTITUCIÓN : ESTUDIO TORALDO "PEREZ LACCA"
FECHA : 28 OCT 2019

Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?

1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?

Claro que sí, esto es un hecho que se ve a diario en los medios de comunicación, los jueces tienen temor a ser cuestionados y ceden a la presión mediática.

2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

Es muy importante, ya que los medios de comunicación influyen en los jueces para que declaren fundados los requerimientos de prisión preventiva. Asimismo, de acuerdo a sus intereses tratan en todo momento que los jueces fallen en sentido a sus intereses.

3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

Por lo tanto que se vulneran todos los derechos fundamentales de las personas. Una arbitraria aplicación de la prisión preventiva hace a una persona muy infeliz, ya que el proyecto de vida que tenía podía quedar trunco.

Objetivo Específico 1: ¿De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?

4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

Si lo considero. Ya que el debido proceso denota una serie de derechos que tienen los imputados, y uno de ellos es el de que una persona no pueda estar en la cárcel más tiempo del debido.

5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada?

Así es, viene a ser una pena anticipada ya que la persona no puede estar presa sin una sentencia judicial.

6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente su respuesta

SI CREO QUE VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
SIENDO QUE LA LIBERTAD ES EL DERECHO MAS
PRECIADO DESPUES DEL DERECHO A LA VIDA.

Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?

7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?

EL DE LOS GRAVES Y FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
YA QUE SI NO HAY OTROS, NO HAY CASO.

8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad?

Fundamente su respuesta.

QUE EL JUEZ COMETERIA UN DELITO YA QUE
ESTA MANDANDO A PRISION A UN DELINCUENTE
QUE EL NO CUMPLE EL ALBO ARJUTIVO E
ILEGAL TAMBIEN EL FISCAL AL INCOAR UNA
PRISION PREVENTIVA COMETE UN DELITO YA QUE
EL DEBE FUNDAR DE LA LEGISLACION.

9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

SI ESTARIA DE ACUERDO, PORQUE YA NO LE
DEJABA AL JUEZ UNA CAPACIDAD DISCRE-
CIONARIA. Y A SU VEZ YA EXISTIA ALGO
TAXATIVO. YA EL JUEZ NO PODIA HACER
INTERPRETACIONES TOTALMENTE



Juan Carlos Perez Lacca
ABOGADO
C.A.C. 7985

FIRMA

La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática

ENTREVISTADO : MÓNICA SISI VISALOT PAREDES
CARGO/ PROFESIÓN : FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL
INSTITUCIÓN : MINISTERIO PÚBLICO - CALLAO
FECHA : 15-11-2019

Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?

1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?

Los magistrados como seres humanos tienen intereses personales y profesionales propios. Sin embargo, su cargo les exige estar dotados de los más altos valores éticos de objetividad, imparcialidad e independencia para desempeñar sus funciones; por ello la presión mediática influye en sus decisiones dependiendo de la interiorización que tengan de los valores éticos con que deben conducirse. Por ello los magistrados sí son susceptibles de dejarse influenciar por la presión mediática.

2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de

su importancia radica en el hecho que al mediaticarse un caso, los valores de objetividad, imparcialidad e independencia con que deben resolverse una solicitud de prisión preventiva se relativizan y se soslayan el estricto cumplimiento de los tres requisitos de procedencia para imponer la medida de prisión preventiva (art 268 con), para responder a intereses de los medios de comunicación (económicos o políticos, que incitan a una falsa alarma social).

3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

En efecto se vulnera el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia (art 2 acápite 24 inc. c) Const. Política del Perú, pues al proceder a una detención preventiva se produce una estigmatización del investigado por el balance publicitario de dicha situación, convirtiendo a esta medida procesal en una pena anticipada, sin que se haya establecido judicialmente responsabilidad penal; en consecuencia, se produce agravio al investigado, se vulnera el Debido proceso y los derechos fundamentales, si abona a un laburo de autoridad que quedará impune.

Objetivo Específico 1: ¿De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?

4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

En efecto el Debido proceso exige el respeto ineludible de las garantías procesales y Constitucionales, y sean cualesquiera de los plazos establecidos para la prisión preventiva, sean estos 9, 18 o 36 meses, ello atenta el Principio de legalidad, pues se mantiene a una persona privada de su libertad (derecho al libre tránsito) sin una sentencia judicial condenatoria y firme; y afecta el Principio de Presunción de Inocencia, al privarse en forma prolongada de libertad sin el sustento de una condena judicial.

5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada?

Debido a los excesivos plazos torcidos a la Prisión Preventiva, esta se convierte en una pena anticipada, el problema es la vulneración de derechos fundamentales en planta carcelaria, el Ministerio Público no logra probar el delito imputado y se procede a la absolución de las cargas penales; sin embargo, ningún magistrado del Poder Judicial, o Ministerio Público se hace responsable por haber privado de la libertad a una persona en forma indebida.

6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente su respuesta

El exceso de carcelería, en cualquier caso afecta Derechos Fundamentales de libertad y libre tránsito, por ello la limitación de este derecho y solo debería proceder en flagrancia de un delito grave, de carácter violento que afecte la vida, salud o libertad de una persona, no en todos los delitos; debiendo procederse a la prisión al la libertad, luego de establecer responsabilidad penal en un debido proceso, luego que la sentencia quede consentida en todos los demás casos.

Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?

7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?

de los tres requisitos lo que más influye es la prognosis de pena, una pena alta, hará que el magistrado del M.P. o P.J. pierda objetividad para sustentar una prisión, aún cuando no se configuran debidamente los otros dos requisitos de procedencia para la prisión, que requieren la existencia de fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, soslayando los análisis familiares, sociales y laborales, sin tener en cuenta que el investigado no representa un peligro para la obstrucción de la investigación o que no pretenda eludir la justicia.

8. Cree usted, ¿Si un Imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.

Una decisión judicial no amparada en Derecho es susceptible de ser considerada un acto arbitrario (abuso de autoridad) conducta antijudicial sancionada por el art 376 CP. Así también dicha conducta atenta de las verificaciones procesales del art 268 del CPP podría encuadrarse dentro de la descripción del delito de Persecución (art. 418 CP); ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueda establecer una acción de garantía (papeles corporales) de declararse fundada o las sanciones administrativas que pueda aconeer la conducta del respectivo al castro en forma ilegal una prisión preventiva indebida.

9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

Lo que debería establecer el art. 268 CPP ante la renuncia de declarar procedente una Prisión Preventiva, sin la concurrencia de todos los Requisitos, es responsabilidad funcional tanto del Ministerio Público o el Poder Judicial por el que emitió una medida tan grave como privar la libertad solo se justifica en caso de flagrancia de un delito grave, de carácter violento que afecte la vida, la salud o la libertad de la víctima en forma definitiva y no para otro tipo de delitos.


MONCÉSIO SALAS PAREDES
Fiscal Adjunta Provincial Penal
Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa

Cañao (Pomer Desw,ho)

ENTREVISTA

TÍTULO: La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la Aplicación de la Prisión Preventiva a Consecuencia de la Presión Mediática

ENTREVISTADO [A]	: RUBEN VALERIO SOTO URBINA
CARGO/ PROFESIÓN	: EXJUEZ PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE. ESPECIALISTA DE CAUSAS DEL PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
INSTITUCIÓN	: PODER JUDICIAL
FECHA	: 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?

1. ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?

A mi parecer, y en mi experiencia como Ex Juez Penal de primera instancia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, es en realidad analizar cada caso en concreto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta al Magistrado la libre discrecionalidad, que ello, habla del criterio de cada funcionario público encargado de administrar justicia en los órganos jurisdiccionales, en resolver o tomar decisión como mejor corresponde conforme a derecho. Asimismo, en los casos mediáticos que se ha visto en todo estos dos o tres últimos años, y respondiendo la pregunta en concreto, considero que la manera que se vulnera los derechos fundamentales de las personas es cuando el Ad-quo aplica de manera errónea los presupuestos materiales que se encuentran regulados en el Artículo 268^o del Código Procesal Penal, ya que se entiende que se debe cumplir de manera copulativa los tres presupuestos antes en mención pero en dichos casos emblemáticos, los medios de prensa son tan intensos y perseverantes, además adelantan opinión del tema no siendo especialista ni conocedores del derecho, tal vez, por su propio interés pero hay mucha posibilidad que influya categóricamente en la decisión que pueda tomar un Juez.

2. En su opinión, ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

En mi opinión, la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva, es relativa ya que es analizar cada caso que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva y analizar cuál es la decisión del Juez de Garantías, y

ver si los medios de comunicación realizan o generan alguna opinión al respecto. Empero, si es un caso mediático como el Caso Lava Jato, Caso Keiko Fujimori o el Caso Odebrecht, los medios de comunicación son visible y notorio el interés sobre esos casos ya que dichas acciones ilícitas, se encuentran involucradas personas públicas de diferentes rubros y en ciertos casos adelantan opiniones y ejercen un rol de intimidación que indirectamente puede influenciar al Juez.

3. Cree usted, ¿Que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

A mi parecer, sí. Porque, una aplicación arbitraria de una norma penal y sobre todo con una medida cautelar provisional que restringe la libertad personal de un imputado (s), puede generar una vulneración de derechos fundamentos como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; asimismo, se tiene en conocimiento que el Juez de Investigación Preparatoria es un Juez de Garantías y como bien establece el pretérito garantiza el respeto y sobre todo cautelar los derechos fundamentales que se encuentran previsto en la Constitución Política del Perú. Por tanto, a correlación también es menester señalar, se vulnera los derechos fundamentales cuando no existe una correcta aplicación de esta medida, ya que en diferentes jurisprudencia nacional como internacional hay establecido parámetros y sobre todo que es excepcional.

Objetivo Específico 1: ¿De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?

4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

Sí, pero además de vulnerar el debido proceso, también vulnera el derecho a la libertad de una persona; pero porque sucede esta figura; el representante del Ministerio Público, presenta su requerimiento de prisión preventiva en un caso simple que el plazo es 9 meses, al declararse fundado dicho requerimiento, el fiscal debe realizar los actos de investigación pero que pasa en la praxis, que no llevan el conteo del plazo de la prisión preventiva y en consecuencia, se vence el plazo previsto, pero el fiscal, como solución a ello y desean que el imputado no salga el libertad, presenta la prolongación por el mismo tiempo, no habiendo avanzando ningún actos de investigación y sobre todo, que cuando presenta el escrito al órgano jurisdiccional tiene 72 horas para proveer el escrito y consecuente señalar fecha de audiencia, pero esos días que pasa en un Establecimiento Penitenciario por exceder el plazo establecido el juzgado, ahí entra a tallar la vulneración del debido proceso y el derecho a la libertad por el exceso de carcelería.

5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada?

No.

6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? Fundamente su respuesta

Si. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo establecido que el imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución en contrario respecto a su estadio a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?

7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?

A mi parecer, son dos

- Los graves y fundados elementos de convicción y;
- El peligro de fuga y obstaculización.

8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.

A mi criterio personal, si un imputado estando en una investigación y la fiscalía presenta un requerimiento con dicha medida cautelar personal, y no cumple con los tres presupuestos materiales establecidos en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se debe declarar infundado, y en consecuencia, poner otra medida de coerción menos gravosa. Siguiendo con la misma línea de ideas, el Juez tiene la facultad por su libre discrecionalidad resolver conforme a derecho respecto a su criterio y por ello, no calificaría como una infracción ya que el Juez tiene la facultad de administrar justicia, y tampoco sería un delito o ilegalidad. Ya que, si el juez en su criterio declara fundado dicho requerimiento, tendrá que realizar una debida motivación de dicho auto; y las partes si no se encuentran conforme puede presentar el recurso que crean pertinente. Pero la incidencia se genera, ya que no está establecido taxativamente en el articulado antes en mención que los presupuestos materiales se deban cumplir de manera copulativa.

9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

Si, estaría de acuerdo. Ya que, en la actualidad en la mayoría de casos que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva, el juez declara fundado y muchas veces no cumpliéndose los tres presupuestos materiales establecido en el código adjetivo penal; asimismo, existe jurisprudencia nacional como internacional que establecen que la prisión preventiva es de carácter excepcional, toda vez, que la regla general es la libertad y la excepción es la cárcel. En la misma línea de ideas, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha emitido informes en el año 2017, estableciendo que nuestro país, es el que tiene el índice más alto de procedencia de prisión preventiva, llevándonos a analizar la situación a fondo de esta medida cautelar que en vez de utilizarla de manera idónea se vuelve un útil popular.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rubén Soto', is written over a horizontal line.

FIRMA

RUBÉN VALERIO SOTO L

CAL 83 (B I

09898288.


ENTREVISTA

TÍTULO: La Vulneración de los Derechos Fundamentales en la aplicación de la Prisión Preventiva a consecuencia de la presión mediática

ENTREVISTADO [A] : SERGIO MARTIN NUÑEZ PALACIOS
CARGO/PROFESIÓN : PRESIDENTE DEL JUZGADO COLEGIADO PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
INSTITUCIÓN : PODER JUDICIAL
FECHA : CALLAO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

Objetivo General: ¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?

1 ¿Considera Usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?



Sí, considero que la presión mediática condiciona el comportamiento no solo de un juez, sino también el de un fiscal. Así, no solo quien, finalmente, otorga la medida se encuentra subordinado a la presión mediática, sino también quien solicita que se imponga dicha medida. Ello, entre otros factores, se debe a la exposición del magistrado ante la desaprobación de la opinión pública. Lo cual está muy mal, porque un juez no debe ceder a ningún tipo de presión, debe ser imparcial al momento de impartir justicia.

2.

2. En su opinión, ¿cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

En teoría todo juez es independiente y la presión mediática no debería tener ninguna relación en la aplicación de una medida como la prisión preventiva que es un instrumento que busca asegurar la presencia del imputado a fin de mantener el correcto funcionamiento de un proceso penal; sin embargo, la presión mediática se convierte en un factor con amplia relevancia, en tanto, su uso arbitrario vulnera derechos del imputado, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad y objetividad con la que debe ser juzgado

3. Cree usted, ¿que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

Sí, el uso desproporcionado y arbitrario de una medida de coerción de ese tipo no solo vulnera derechos fundamentales de un imputado, sino que, además, trae consigo

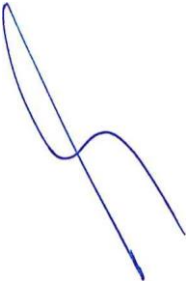
daños relacionados al ámbito personal, social y laboral. De este modo, el derecho a la libertad es solo un factor dentro de los tantos otros derechos afectados de corte procesal y constitucional. Cabe precisar que su sola transmisión por el canal de Justicia TV ya está afectando la presunción de inocencia que le asiste a los imputados pues se da una proyección de culpabilidad ante la opinión pública que no necesariamente conocen de Derecho.

Objetivo Específico 1: ¿De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso?

4. ¿Considera usted que el exceso de carcelería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?

Si tenemos en cuenta que el debido proceso es un canon de control de la constitucionalidad de los procesos judiciales, además de un derecho-principio, su importancia radica en que este no solo protege su contenido en sí mismo, sino que, también, lo hace respecto a otros derechos conexos tales como el derecho a la defensa, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la cosa juzgada, la pluralidad de instancias, el juez determinado por ley, entre otros. Bajo ello, el exceso de carcelería evidencia un desenvolvimiento deficiente de un proceso penal, por lo que, de manera indefectible, hay una vulneración a los derechos de quien sufre tal privación de su libertad.

5. ¿Considera usted que el exceso de carcelería, viene a ser una pena anticipada?



El exceso de carcelería no debería entenderse como una pena anticipada, sino como una muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario. En muchas ocasiones, el exceso de carcelería se da debido a la falta de una actuación oportuna por parte del Ministerio Público para avanzar en el proceso o ante un tardío desarrollo del juicio. Al respecto, cabe acotar que el exceso de carcelería no solo es un problema social, sino que, además, representa un incumplimiento del Estado en cuanto a sus deberes internacionales sobre la protección integral de los reos.

6. ¿Usted cree que el exceso de carcelería, vulnera derechos fundamentales? fundamente su respuesta-.

El exceso de carcelería de manera inevitable vulnera derechos fundamentales, ello en tanto que este significa que determinada persona se encuentra privada de su libertad sin mayor justificación o sin mayor resultado en cuanto al avance del proceso penal se refiere. De este modo, lejos de que se obtenga de justicia, lo que se produce es que determinada persona se encuentre en estado de vulnerabilidad sobre el ejercicio y desarrollo de sus derechos de corte procesal, social, económicos. Aunado a ello, son sus derechos fundamentales los que se ven comprometidos, pues hay una privación o limitación para ejercer derechos básicos que encuentran fundamento en la dignidad del ser humano.

Objetivo Especifico 2. ¿De qué forma se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?

7. ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?


Considero que el peligro procesal y, en concreto, el arraigo del imputado, es aquel que más influye. Ahora, ello representa un problema, ya que el arraigo encuentra fundamento en que determinada persona tenga un domicilio estable, un asiento familiar, estabilidad laboral o cualquier otro elemento de similar naturaleza que permita al juez colegir que el imputado no eludirá la acción de la justicia. Bajo lo indicado, ocurre que gran parte de la población que se encuentra sometida a un proceso penal se encuentra en estado de precariedad, lo cual conlleva a que sean las personas de estratos sociales más bajos quienes se vean afectados por una medida cautelar de uso extraordinario como la prisión preventiva, pues es este grupo social, en general, el que forma o basa sus vínculos en relaciones informales, ello ya sea en cuanto al ámbito social o laboral. En consecuencia, el no tener forma de acreditar estos elementos más allá de lo que el imputado pueda exponer, representa un punto débil a tener en cuenta, más aún si se considera que la gran mayoría de los jueces tienen una formación netamente formalista en cuanto a la aplicación de la ley se refiere.

8. Cree usted, ¿Si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.

Naturalmente, primero estaría ante una falta administrativa al no motivar debidamente su resolución y ello traería como consecuencia la imposición de una sanción por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. De otro lado, si se invoca hechos falsos o no se valora elementos de convicción inexistentes, también podría consumarse un delito como es el prevaricato.

9. Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268^o del Código Procesal Penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva.

De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha recalcado que, para ordenar la aplicación de la prisión preventiva en contra de un imputado, deben concurrir todos los requisitos que requiere la medida. En ese sentido, se tiene que, para la imposición de esta, los requisitos son concurrentes y no alternativos. No obstante, sin perjuicio de ello, es necesario establecer de manera expresa que, ante la falta de uno de los presupuestos de la prisión preventiva, esta no debiera aplicarse, más aún al considerar la naturaleza provisional y excepcional con la que cuenta.


SERGIO MARTÍN NÚÑEZ PALACIOS
DNI 41170367
C.A.L. 41502

VI. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: NAHUE CRUZADO CLARA ISABEL
 1.2. Cargo e institución donde labora: UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - ICA - CALLAO
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Callao, 07 DE OCTUBRE del 2019

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No 08580729 Telf 972001678

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: SILVA ESCOBAR, NATALIA DAFNE
 1.2. Cargo e institución donde labora: MINISTERIO PÚBLICO
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

X

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

99 %

Callao, 11 de octubre del 2019

Natalia D
 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 Natalia Dafne Silva Escobar
 DNI No. 23827910 Telf. 993462347
 C.A.A. N° 114

DNI No. 23827910 Telf. 993462347
 C.A.A. N° 114

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: SOTO URRUTIA RUBEN VALERIO
 1.2. Cargo e institución donde labora: PODER JUDICIAL DEL CALLAO
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:
 1.4. Autor(A) de instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE				ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X			
4. ORGANIZACION	Existe una organización lógica.											X			
5. SUFFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las categorías												X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, supuestos jurídicos											X			
9. METODOLOGIA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación



IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Callao, 14 OCTUBRE del 2019


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09998288

CAL : 33131

VII. MATRIZ DE CONSISTENCIA

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: RICARDO ANTONIO REBATA FREUNDT

FACULTAD/ESCUELA: DERECHO

TÍTULO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	La vulneración de los Derechos Fundamentales en la aplicación de la Prisión Preventiva a consecuencia de la presión mediática
PROBLEMA GENERAL	¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	<p>Problema específico 1</p> <p>¿De qué manera el exceso de carcelaria vulnera el debido proceso?</p> <p>Problema específico 2</p> <p>¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?</p>
SUPUESTO GENERAL	La vulneración de los derechos fundamentales se da cuando se declara procedente la prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal.
SUPUESTOS ESPECIFICOS	<p>Supuesto específico 1</p> <p>El exceso de carcelaria vulnera el debido proceso a consecuencia de no cumplirse los plazos establecidos en el Código Procesal Penal en torno a la prisión preventiva.</p> <p>Supuesto específico 2</p> <p>El ordenamiento jurídico procesal penal vigente contribuye de manera insuficiente en la aplicación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva.</p>

OBJETIVO GENERAL	Determinar de que manera se vulneran los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>Objetivo específico 1 De qué manera el exceso de carceraria vulnera el debido proceso.</p> <p>Objetivo específico 2 De qué forma se vulneran los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva.</p>
DISEÑO DEL ESTUDIO	Diseño teoría fundamentada
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	Entrevistas, análisis documental
POBLACIÓN Y MUESTRA	La población fueron magistrados y abogados especialistas en Derecho Penal y la muestra está compuesta por siete especialistas calificados
CATEGORIAS	<p>Categoría 1: La vulneración de derechos fundamentales</p> <p>Categoría 2: La aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática.</p>
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	Hermenéutico, inductivo y sistemático

**MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DEL DESARROLLO
DEL PROYECTO DE INVESTIGACION**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GERARDO MARTIN RIVERA SALAZAR


FACULTAD/ESCUELA: DERECHO

TÍTULO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	La vulneración de los Derechos Fundamentales en la aplicación de la Prisión Preventiva a consecuencia de la presión mediática
PROBLEMA GENERAL	¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales en la aplicación de prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	<p>Problema específico 1</p> <p>¿De qué manera el exceso de carcelaria vulnera el debido proceso?</p> <p>Problema específico 2</p> <p>¿De qué manera se vulnera los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva?</p>
SUPUESTO GENERAL	La vulneración de los derechos fundamentales se da cuando se declara procedente la prisión preventiva, no cumpliéndose los presupuestos materiales que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal.
SUPUESTOS ESPECIFICOS	<p>Supuesto específico 1</p> <p>El exceso de carcelaria vulnera el debido proceso a consecuencia de no cumplirse los plazos establecidos en el Código Procesal Penal en torno a la prisión preventiva.</p> <p>Supuesto específico 2</p> <p>El ordenamiento jurídico procesal penal vigente contribuye de manera insuficiente en la aplicación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva.</p>

OBJETIVO GENERAL	Determinar de que manera se vulneran los derechos fundamentales en la aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>Objetivo específico 1 De qué manera el exceso de carcelería vulnera el debido proceso.</p> <p>Objetivo específico 2 De qué forma se vulneran los derechos fundamentales al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva.</p>
DISEÑO DEL ESTUDIO	Diseño teoría fundamentada
TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	Entrevistas, análisis documental
POBLACIÓN Y MUESTRA	La población fueron magistrados y abogados especialistas en Derecho Penal y la muestra está compuesta por siete especialistas calificados
CATEGORIAS	<p>Categoría 1: La vulneración de derechos fundamentales</p> <p>Categoría 2: La aplicación de la prisión preventiva a consecuencia de la presión mediática.</p>
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	Hermenéutico, inductivo y sistemático

VII. TRIANGULACIÓN

Preguntas	JUAN PERES LACCA Abogado1	MONICA VISALOT PAREDES Abogado 2	RUBEN SOTO URBINA Ex-Juez Penal de la CSJ de Lima Norte.	SERGIO NUÑEZ PALACIOS Presidente del Colegiado Permanente de la CSJ del Callao.	CONVERGENCIA (acuerdo)	DIVERGENCIA (desacuerdo)	INTERPRETACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS
1.- ¿Considera usted que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva?	Claro que sí, ese en un hecho que se ve a diario en los medios de comunicación, los jueces tienen temor a ser justos y ceden a la presión mediática.	Los magistrados como seres humanos tienen intereses personales y profesionales propios. Sin embargo, su cargo les exige estar dotados de los más altos valores éticos de objetividad, imparcialidad e independencia para desempeñar sus funciones, por ello la presión mediática influirá en sus decisiones dependiendo de la interiorización que tengan de los valores éticos con que deben conducirse, por ello los magistrados si son susceptibles de dejarse influenciar por la presión mediática.	A mi parecer, y en mi experiencia como Ex Juez Penal de primer instancia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, es en realidad analizar cada caso en concreto, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial, faculta al Magistrado la libre discrecionalidad, que ello, habla del criterio de cada funcionario público encargado de administrar justicia en los órganos jurisdiccionales, en resolver o tomar decisión como mejor corresponde conforme a derecho. Asimismo, en los casos mediáticos que se ha visto en todo estos dos o tres últimos años, y respondiendo la pregunta en concreto, considero que la manera que se vulnera los derechos fundamentos de las personas es cuando el Ad-quo aplica de manera errónea los presupuestos materiales que se encuentran regulados en el Artículo 268° del Código Procesal Penal, ya que se entiende que se debe cumplir de manera	Sí, considero que la presión mediática condiciona el comportamiento no solo de un juez, sino también el de un fiscal. Así, no solo quien, finalmente, otorga la medida se encuentra subordinado a la presión mediática, sino también quien solicita que se imponga dicha medida. Ello, entre otros factores, se debe a la exposición del magistrado ante la desaprobación de la opinión pública.	Los cuatro entrevistados consideran, que los magistrados se dejan influenciar por la presión mediática al aplicar la prisión preventiva, ya que los condiciona y son susceptibles a la opinión pública respecto a la decisión que puedan tomar en dichos casos.	Ninguno	Los entrevistados interpretan que la presión mediática influye en los magistrados al aplicar la prisión preventiva.



copulativa los tres
presupuestos antes en
mención pero en dichos
casos emblemáticos, los
medios de prensa son tan
intensos y perseverantes,
además adelantan opinión
del tema no siendo
especialista ni conocedores
del derecho, tal vez, por su
propio interés pero hay
mucho posibilidad que
influya categóricamente en
la decisión que pueda tomar
un Juez.

2.- En su opinión. ¿Cuál es la importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva?

Es muy importante, ya que los medios de comunicación influyen en los jueces para que declaren fundados los requerimientos de prisión preventiva. Asimismo, de acuerdo a sus intereses tratan en todo momento que los jueces fallen en sentido a sus intereses.

Su importancia radica en el hecho que, al mediatizarse un caso, los criterios de objetividad, imparcialidad e independencia con que deben resolverse una solicitud de prisión preventiva se relativizan y se soslayan el estricto cumplimiento de los tres requisitos de procedencia para imponer la medida de prisión preventiva (art.268 cpp) para responder a intereses de los medios de comunicación (económicos o políticos) que incitan a una falsa alarma social.

La importancia de la presión mediática en la aplicación de la prisión preventiva es relativa ya que es analizar cada caso que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva y analizar cuál es la decisión del Juez de Garantías, y ver si los medios de comunicación realizan o generan alguna opinión al respecto. Empero, si es un caso mediático como el Caso Lava Jato, Caso Keiko Fujimori o el Caso Odebrecht; los medios de comunicación es visible y notorio el interés sobre esos casos ya que dichas acciones ilícitas, se encuentran involucrados personas públicas de diferentes rubros y en ciertos casos adelantan opiniones y ejercen un rol de intimidación que indirectamente puede influenciar al Juez.

En teoría todo juez es independiente y la presión mediática no debería tener ninguna relación en la aplicación de una medida como la prisión preventiva que es un instrumento que busca asegurar la presencia del imputado a fin de mantener el correcto funcionamiento de un proceso penal; sin embargo, la presión mediática se convierte en un factor con amplia relevancia, en tanto, su uso arbitrario vulnera derechos del imputado, tales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad y objetividad con la que debe ser juzgado.

El primero, segundo y cuarto entrevistado, consideran que es importante o relevante la presión mediática cuando existe un caso de prisión preventiva, toda vez, que al mediatizarse se soslaya el cumplimiento de los presupuestos materiales de la prisión preventiva.

El tercer entrevistado, indica que la importancia de la presión mediática en la aplicación de esta medida cautelar personal es relativa y que se debe analizar cada caso en concreto.

Los entrevistados consideran que existe una importante relevancia de los medios de comunicación al ejercer la presión mediática en la aplicación de esta medida cautelar.

3.- ¿Cree usted que se vulneran los derechos fundamentales de los imputados en una arbitraria aplicación de la prisión preventiva?

Por supuesto que se vulneran todos los derechos fundamentales de las personas. Una arbitraria aplicación de la prisión preventiva hace a una persona muy infeliz, ya que el proyecto de vida que tenía podía quedar trunco.

En efecto se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia (art. 2 acápite 24 inc. “c”) Constitución política del Perú, pues al procederse a una detención preventiva, se produce una estigmatización del investigado, pues al haberse publicitado dicha situación, convierte a esta medida personal cautelar en una pena anticipada, sin que se haya establecido judicialmente responsabilidad penal; en consecuencia, se produce agravio al investigado, se vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales, se abona a un abuso de autoridad que quedara impune.

A mi parecer, sí. Porque, una aplicación arbitraria de una norma penal y sobre todo con una medida cautelar provisional que restringe la libertad personal de un imputado (s), puede generar una vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; asimismo, se tiene en conocimiento que el Juez de Investigación Preparatoria es un Juez de Garantías y como bien establece el pretérito garantiza el respeto y sobre todo cautelar los derechos fundamentales que se encuentran previsto en la Constitución Política del Perú. Por tanto, a correlación también es menester señalar, se vulnera los derechos fundamentales cuando no existe una correcta aplicación de esta medida, ya que en diferente jurisprudencia

Sí, el uso desproporcionado y arbitrario de una medida de coerción de ese tipo no solo vulneran derechos fundamentales de un imputado, sino que, además, trae consigo daños relacionados al ámbito personal, social y laboral. De este modo, el derecho a la libertad es solo un factor dentro de los tantos otros derechos afectados de corte procesal y constitucional. Cabe precisar que su sola transmisión por el canal de Justicia TV ya está afectando la presunción de inocencia que le asiste a los imputados pues se da una proyección de culpabilidad ante la opinión pública que

Los 4 Ninguna. entrevistados consideran que existe una vulneración de derechos fundamentales cuando existe una aplicación arbitraria y desproporcionada de la prisión preventiva.

Efectivamente, en nuestra actualidad es notoria la aplicación arbitraria y desproporcionada de la prisión preventiva y en consecuencia, ello genera la vulneración de derechos fundamentales de los sujetos inmersos en dichos procesos.

			<p>nacional como no necesariamente internacional hay conocen de Derecho. establecido parámetros y sobre todo que es excepcional.</p>				
<p>4.- ¿Considera usted que el exceso de carcerería que sufre un imputado, vulnera la garantía constitucional al debido proceso?</p>	<p>Si lo considera, ya que el debido proceso abarca una serie de derechos que tienen los imputados y uno de ellos es la que una persona no puede estar en la cárcel más tiempo del debido.</p>	<p>En efecto el debido proceso exige el respeto irrestricto de las garantías procesales y constitucionales , y sean cualesquiera los plazos establecidos para la prisión preventiva, sean estos 9, 18 o 36 meses, ello atenta el principio de legalidad pues se mantiene a una persona privada de su libertad (derecho al libre tránsito) sin una sentencia judicial condenatoria y firme , y afecta el principio de presunción de inocencia al privarse en forma prolongada la libertad sin el</p>	<p>Sí, pero además de vulnerar el debido proceso, también vulnera el derecho a la libertad de una persona; pero porque sucede esta figura; el representante del Ministerio Público, presenta su requerimiento de prisión preventiva en un caso simple que el plazo es 9 meses, al declararse fundado dicho requerimiento, el fiscal debe realizar los actos de investigación pero que pasa en la praxis, que no llevan el conteo del plazo de la prisión preventiva y en consecuencia, se vence el plazo previsto, pero el fiscal, como solución a ello y desean que el imputado no salga el libertad, presenta la prolongación por el mismo tiempo, no habiendo avanzando ningún actos de investigación y</p>	<p>Si tenemos en cuenta que el debido proceso es un canon de control de la constitucionalidad de los procesos judiciales, además de un derecho-principio, su importancia radica en que este no solo protege su contenido en sí mismo, sino que, también, lo hace respecto a otros derechos conexos tales como el derecho a la defensa, la debida motivación de las resoluciones judiciales, la cosa juzgada, la pluralidad de instancias, el juez determinado por ley, entre otros. Bajo ello, el exceso de carcerería evidencia un desenvolvimiento deficiente de un proceso penal, por lo que, de</p>	<p>Los 4 letrados manifiestan que, el exceso de carcerería que sufre un imputado (s) dentro de un proceso penal, vulnera la garantía constitucional del debido proceso.</p>	<p>Ninguna.</p>	<p>Se interpreta que si existe un exceso de carcerería en un proceso penal, la consecuencia de ello, es que se estaría vulnerando las garantías del debido proceso y otros derechos constitucionales.</p>

		sustento de una condena judicial.	sobre todo, que cuando presenta el escrito al órgano jurisdiccional tiene 72 horas para proveer el escrito y consecuente señalar fecha de audiencia, pero esos días que pasa en un Establecimiento Penitenciario por exceder el plazo establecido el juzgado, ahí entra a tallar la vulneración del debido proceso y el derecho a la libertad por el exceso de carcelería.	manera indefectible, hay una vulneración a los derechos de quien sufre tal privación de su libertad.			
5.- ¿Considera usted que el exceso de carcelería viene a ser una pena anticipada?	Así es, viene a ser una pena anticipada ya que la persona no puede estar presa sin una sentencia judicial.	Debido a los excesivos plazos otorgados a la prisión preventiva, esta se convierte en una pena anticipada, el problema de la vulneración de derechos fundamentales se presenta cuando el ministerio público, no logra probar el delito imputado y se procede a la absolución de los	No.	El exceso de carcelería no debería entenderse como una pena anticipada, sino como una muestra de un deficiente sistema de justicia, así como un sistema carcelario. En muchas ocasiones, el exceso de carcelería se da debido a la falta de una actuación oportuna por parte del Ministerio Público para avanzar en el proceso o ante un tardío desarrollo del juicio. Al respecto, cabe acotar que el exceso de	El entrevistado 3 y 4 consideran que el exceso de carcelería no viene hacer una pena anticipada, toda vez, que son tópicos diferentes ya que el exceso de carcelería va entorno a una deficiente sistema de justicia y carcelería y sobre todo falta de actuación idónea	El entrevistado 1 y 2, manifiestan que, si es una pena anticipada, toda vez, que un sujeto que está en un Establecimiento Penitenciario, restringido de su libertad, y sin una sentencia judicial; y pasa el plazo previsto por la	Se interpreta que existen divergencias de criterios entre los entrevistados. Sin embargo, consideramos que si es una pena anticipada, ya que una persona que cumple el plazo de prisión preventiva y al fin proceso es

		cargos penales, sin embargo, ningún magistrado del poder judicial ni del ministerio público se hace responsable por haber privado de la libertad a una persona en forma indebida.		carcelería no solo es un problema social, sino que, además, representa un incumplimiento del Estado en cuanto a sus deberes internacionales sobre la protección integral de los reos.	de parte del Ministerio Público.	prisión preventiva y al final el M.P. lo absuelve de los cargos, estarían ante una pena anticipada y se vulneraría derechos fundamentales.	declarado inocente, nadie le devuelve los días que paso en prisión.
6.- ¿Usted cree que el exceso de carcelería vulnera derechos fundamentales? Fundamente su respuesta.	Si creo que vulnera los derechos fundamentales s siendo que la libertad es el derecho más preciados después del derecho a la vida.	Que el exceso de carcelería, en cualquier caso afecta derechos fundamentales de libertad y libre tránsito, por ello la limitación de este derecho solo debería proceder en flagrancia de un delito grave de carácter violento que afecte la vida, salud o libertad de una persona, no en todos los delitos, debiendo procederse a la privación de la libertad luego de establecer responsabilidad	Si. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo establecido que el imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución en contrario respecto a su estadio a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.	Si. Porque al declarar procedente y establecer el Juez un plazo establecido que el imputado debe cumplir en un E.P., y sabiendo que no existe resolución en contrario respecto a su estadio a más días, se estaría vulnerando el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.	Los cuadros entrevistados profieren que, si se vulneran los derechos fundamentales cuando existe en un proceso penal el exceso de carcelería.	Ninguna	La interpretación es que establecido el plazo la prisión preventiva y ello, se vence y ni el fiscal ni el órgano jurisdiccional competente, ha emitido algún pronunciamiento, el imputado estaría sufriendo un exceso de carcelería y en consecuencia, se estaría vulnerando sus derechos fundamentales, tales como el

		penal con un debido proceso, luego que la sentencia quede consentida en todos los demás casos.					derecho a la libertad, presunción de inocencia y el debido proceso.
7.- ¿Cuál de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el que más influye en la aplicación de esta medida cautelar?	Los graves y fundados elementos de convicción ya que, si no hay estos, no hay caso.	De los tres requisitos lo que más influye es la prognosis de la pena, una pena alta hará que el magistrado del ministerio público o del poder judicial pierda objetividad para sustentar una prisión, aun cuando no se configuren debidamente los otros requisitos de procedencia para la prisión que requiere la existencia de fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, soslayando los arraigos familiares, sociales y laborales, sin tener en cuenta que el investigado no representa un peligro para la	A mi parecer, son dos Los graves y fundados elementos de convicción y; El peligro de fuga y obstaculización.	Considero que el peligro procesal y, en concreto, el arraigo del imputado, es aquel que más influye. Ahora, ello representa un problema, ya que el arraigo encuentra fundamento en que determinada persona tenga un domicilio estable, un asiento familiar, estabilidad laboral o cualquier otro elemento de similar naturaleza que permita al juez colegir que el imputado no eludirá la acción de la justicia. Bajo lo indicado, ocurre que gran parte de la población que se encuentra sometida a un proceso penal se encuentra en estado de precariedad, lo cual conlleva a que sean las personas de estratos sociales más bajos quienes se vean afectados por una medida cautelar de uso extraordinario como la prisión preventiva, pues es	El entrevistado 1 y 3, establecen que el presupuesto material de la prisión preventiva, que más influye en los magistrados son los graves y fundados elementos de convicción. Ya que, sin la acreditación de los elementos de convicción no habría como imputar a una persona que ha cometido el hecho delictivo. Asimismo, también el entrevistado 3 y 4, mantienen que el presupuesto material sería el peligro de fuga y/o obstaculización o también conocimiento como peligro procesal, ya que el	Ninguna.	Se interpreta que, los presupuestos materiales de la prisión preventiva influyen de manera categórica ya que se deben cumplir de manera copulativa pero entre los que más influyen son los graves y fundados elementos de convicción y el presupuesto de peligro de fuga y obstaculización .

obstaculización de la investigación o que no pretenda eludir la justicia.

este grupo social, en general, el que forma o basa sus vínculos en relaciones informales, ello ya sea en cuanto al ámbito social o laboral. En consecuencia, el no tener forma de acreditar estos elementos más allá de lo que el imputado pueda exponer, representa un punto débil a tener en cuenta, más aún si se considera que la gran mayoría de los jueces tienen una formación netamente formalista en cuanto a la aplicación de la ley se refiere.

problema es determinar como una persona tiene un domicilio estable o estabilidad laboral.

Por tanto, la entrevistada 2, manifiesta que el presupuesto material que más influye en los magistrados es la prognosis de la pena, ya que una pena alta hará que el magistrado sea Juez o Fiscal, pierda objetividad para sustentar dicho requerimiento.

<p>8.- ¿Cree usted si un imputado no cumple los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez al aplicarla, cometería alguna infracción, delito o ilegalidad? Fundamente su respuesta.</p>	<p>Que el juez cometería un delito, ya que está mandando a prisión a una persona que es inocente, es algo arbitrario e ilegal; también el fiscal al incoar una prisión preventiva comete un delito ya que es defensor de la legalidad.</p>	<p>Una decisión judicial no amparada en derecho es susceptible de ser considerada un acto arbitrario (abuso de autoridad), conducta antijurídica sancionada por el artículo 376 del código penal; así también dicha conducta alejada de las verificaciones procesales del artículo 268 del código procesal penal podría encuadrarse dentro de la descripción del delito de prevaricato (artículo 418 del Código Penal); ello sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueda</p>	<p>A mi criterio personal, si un imputado estando en una investigación y la fiscalía presenta un requerimiento con dicha medida cautelar personal, y no cumple con los tres presupuestos materiales establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, se debe declarar infundado y, en consecuencia, poner otra medida de coerción menos gravosa. Siguiendo con la misma línea de ideas, el Juez tiene la facultad por su libre discrecionalidad resolver conforme a derecho respecto a su criterio y por ello, no calificaría como una infracción ya que el Juez tiene la facultad de administrar justicia, y tampoco sería un delito o ilegalidad. Ya que, si el juez en su criterio declara fundado dicho requerimiento, tendrá que realizar una debida motivación de dicho auto; y las partes si no se encuentran conforme puede presentar el</p>	<p>Naturalmente, primero estaría ante una falta administrativa al no motivar debidamente su resolución y ello traería como consecuencia la imposición de una sanción por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. De otro lado, si se invoca hechos falsos o no se valora elementos de convicción inexistentes, también podría consumarse un delito como es el prevaricato.</p>	<p>Los entrevistados 1 y 2, consideran que al no cumplirse los presupuestos materiales de la prisión preventiva, y el juez así aplica dicha medida, cometería un delito y ello sería el abuso de autoridad, toda vez, que su decisión no estaba amparada en derecho.</p> <p>Asimismo, el entrevistado 4 considera que estaría en una falta administrativa ya que al no realizar una debida motivación de</p>	<p>El entrevistado 2, considera que no cometería alguna infracción, delito o ilegalidad, toda vez, que la Ley Organice del Poder Judicial, faculta al Juez la libre discrecionalidad y conforme a derecho debe resolver cumpliendo con los estándares procesales y constitucionales.</p>	<p>Eso quiere decir, que el Juez de Garantías aplica la prisión preventiva a sabiendas que el imputado no cumple los presupuestos materiales, estaría comiendo una infracción por falta de motivación de su resoluciones y un delito si invoca hechos falsos y/o no valora los elementos de convicción de los requerimientos que presenta el ministerio público.</p>
---	--	---	---	---	--	--	--

	<p>establecer una acción de garantía (habeas corpus) de declararse fundada o las sanciones administrativas que pueda acarrear la inconducta del magistrado al resolver en forma ilegal una prisión preventiva indebida.</p>	<p>recurso que crean pertinente. Pero la incidencia se genera, ya que no está establecido taxativamente en el articulado antes en mención que los presupuestos materiales se deban cumplir de manera copulativa.</p>	<p>su resolución, calificaría en ello. Además, si el Juez invoca hechos falsos y no valora los elementos de convicción estaría cometiendo el delito de prevaricato.</p>
--	---	--	---

<p>9. ¿Estaría usted de acuerdo que en el artículo 268 del código procesal penal, se añada un inciso, indicando taxativamente que el juez a la falta de uno de los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, bajo ninguna circunstancia podrá declarar fundado el pedido de prisión preventiva?</p>	<p>Si estaría de acuerdo, porque ya no le dejaría al juez una capacidad discrecional y a su vez ya existiría algo taxativo, ya que el juez no podría hacer interpretaciones infundadas.</p>	<p>Lo que debería establecer el artículo 268 del código procesal penal ante la verificación de declarar procedente una prisión preventiva sin la concurrencia de todos los requisitos, es responsabilidad funcional tanto del ministerio público o el poder judicial, pues a mi criterio una medida tan gravosa como perder la libertad solo se justifica en caso de flagrancia de un delito grave de carácter violento que afecte la vida, la salud o la libertad de la víctima en forma definitiva y no para otro tipo de delitos.</p>	<p>Sí, estoy de acuerdo. Ya que, en la actualidad en la mayoría de los casos que la fiscalía presenta un requerimiento de prisión preventiva, el juez declara fundado y muchas veces no cumpliéndose los tres presupuestos materiales establecido en el código adjetivo penal; asimismo, existe jurisprudencia nacional como internacional que establecen que la prisión preventiva es de carácter excepcional, toda vez, que la regla general es la libertad y la excepción es la cárcel. En la misma línea de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido informes en el año 2017, estableciendo que nuestro país, es el que tiene el índice más alto de procedencia de prisión preventiva, llevándonos a analizar la situación a fondo de esta medida cautelar que en vez de utilizarla de manera idónea se vuelve un útil popular.</p>	<p>De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y ha recalado que, para ordenar la aplicación de la prisión preventiva en contra de un imputado, deben concurrir todos los requisitos que requiere la medida. En ese sentido, se tiene que, para la imposición de esta, los requisitos son concurrentes y no alternativos. No obstante, sin perjuicio de ello, es necesario establecer de manera expresa que, ante la falta de uno de los presupuestos de la prisión preventiva, esta no debiera aplicarse, más aún al considerar la naturaleza provisional y excepcional con la que cuenta.</p>	<p>Los entrevistados 1, 3 y 4, consideran que estarían de acuerdo que en el artículo 268° del C.P.P. se añada un inciso, indicando taxativamente que a falta de uno de los tres presupuestos materiales de esta medida de coercitiva personal, el Juez no deberá declarar fundado dicho requerimiento. Ya que, en la actualidad en el sistema de justicia, mediante los Magistrados declaran fundada dicha medida, sin que se cumplan los tres presupuestos copulativamente y ello acarrea una vulneración de derechos fundamentales.</p>	<p>La entrevistada 2, indica que debería establecerse en el artículo 268° del C.P.P. Una supervisión de procedencia de dicha medida coercitiva, ya que sin la concurrencia de todos los requisitos y así el Juez declara fundada la prisión preventiva, debería ser sancionada por responsabilidad funcional.</p>	<p>Se puede indicar, que sería viable añadir un inciso al artículo 268° del Código Procesal Penal, indicando taxativamente que para la procedencia de la prisión preventiva debe cumplirse los tres presupuestos materiales del articulo antes mencion, con la finalidad de vulnerar derechos fundamentales del sujeto que se encuentra dentro de un proceso penal.</p>
--	---	--	--	---	---	---	---

